



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA REALIZACIÓN DE LOS “TRABAJOS DE AUDITORÍA DEL CIERRE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020 CON AYUDA DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) EN LA COMUNIDAD DE MADRID”.

1. INTRODUCCIÓN

El Reglamento (UE) 1306/2013 el Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo, en su artículo 37 *Abono de saldo y cierre del programa* establece:

*La Comisión efectuará el pago del saldo, en función de las disponibilidades presupuestarias, una vez recibido el último informe anual de situación relativo a la ejecución de un programa de desarrollo rural, basándose en el plan financiero vigente, las cuentas anuales del último ejercicio de aplicación del programa de desarrollo rural y la decisión de liquidación correspondiente. Esas cuentas se presentarán a la Comisión **a más tardar seis meses después del plazo de admisibilidad de los gastos** mencionado en el artículo 65, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013, y, en su caso, en relación con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/2220, y se referirán a los gastos efectuados por el organismo pagador autorizado hasta la fecha límite de admisibilidad de los gastos.*

El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2020/2220 amplió el plazo de admisibilidad del gasto del FEADER establecido en el artículo 65, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1303/2013:

En el caso de los programas prorrogados de conformidad con el artículo 1, del presente Reglamento, las referencias a los períodos o plazos en el artículo 50, apartado 1, artículo 51, apartado 1, artículo 57, apartado 2, artículo 65, apartados

2 y 4, y en el párrafo primero del artículo 76 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 se prorrogarán por dos años.

Las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia, se establecen en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 agosto de 2014.

El organismo pagador del FEAGA y FEADER en la Comunidad de Madrid es la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior conforme al Decreto 76/2006, de 21 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid de los gastos financiados por los fondos europeos agrícolas.

A su vez, el indicado Decreto 76/2006 designa a la Intervención General de la Comunidad de Madrid (IGCM) como organismo de certificación de las cuentas del FEAGA y FEADER, correspondiéndole, por tanto, el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 9 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 y normativa concordante.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego tiene por objeto regular la prestación de los servicios profesionales para la realización de la auditoría y emisión de los correspondientes informe y dictamen relativo a las cuentas de cierre del programa de desarrollo rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en su calidad de Organismo de Certificación, debe emitir con anterioridad al 30 de junio de 2026.



3. ALCANCE DEL TRABAJO

Los gastos corresponden a los cinco trimestres comprendidos entre el 16 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2025. El trabajo de auditoría realizado sobre los gastos incluidos en la cuenta FEADER 2025, que abarca el período 16.10.2024 a 15.10.2025, deberá completarse con una serie de pruebas sobre el gasto efectuado hasta el 31 de diciembre de 2025.

Las actuaciones a desarrollar consistirán en el examen de los documentos acreditativos de la información recogida en las cuentas anuales, el análisis de los procedimientos establecidos y la verificación de una muestra representativa de transacciones que confirme los gastos imputados al FEADER.

El alcance del trabajo se fijará de acuerdo con la normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable, las directrices dictadas por la Comisión Europea sobre el cierre de los programas de desarrollo rural, y demás normas técnicas específicas de desarrollo.

4. NORMATIVA

La elaboración del informe y dictamen, así como los trabajos de auditoría en los que estos se fundamentan, se regirán por la normativa que a continuación se detalla, sin perjuicio de cualquier otra disposición legal o reglamentaria que resulte aplicable:

- Reglamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2024, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
- Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al



Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.

- Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
- Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro.
- Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia.
- Decisión de la Comisión, de 16 de julio de 2025, relativa a la aprobación de las directrices sobre el cierre de los programas de desarrollo rural de los Estados miembros adoptados para recibir ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) durante el período 2014-2022.

El trabajo deberá desarrollarse con sujeción a las directrices establecidas por la Comisión Europea para la auditoría de certificación de las cuentas de fondos agrícolas, debiendo hacerse especial mención a las siguientes:

- DIRECTRIZ N.º 2: GASTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC. DIRECTRIZ SOBRE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN ANUAL DE GASTOS DEL FEAGA/FEADER.
- GUIDELINE NO 3 B). GUIDELINE FOR THE CERTIFICATION AUDIT OF THE EAFRD 2014-2022 ACCOUNTS COVERING THE PERIOD



16/10/2024-31/12/2025. Reporting Requirements and Opinion issued by the Certification Body.

Cabe señalar que las citadas directrices se encuentran en permanente actualización por lo que deberá prestarse especial atención al empleo de las versiones aplicables de éstas durante toda la vigencia del contrato.

Finalmente deberán observarse las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la IFAC, así como las normas de auditoría del sector público aprobadas mediante resolución de la Intervención General de la Administración del Estado.

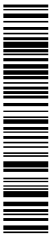
5. TRABAJOS A REALIZAR

El servicio objeto del contrato consiste en la realización de los trabajos de auditoría necesarios para el cierre del programa de desarrollo rural 2014-2020 del organismo pagador de la Comunidad de Madrid, que debe efectuar la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en su calidad de organismo de certificación.

Los trabajos a realizar son, básicamente, los siguientes:

- 1) Elaboración de la **estrategia global de auditoría**, de conformidad con los artículos 6 y 7 del Reglamento de Ejecución (UE) 908/2014 de la Comisión, en la que se defina el alcance, calendario y orientación de la auditoría de certificación, los métodos de auditoría y la metodología del muestreo.
- 2) Redacción del **plan de auditoría**. Éste contendrá, al menos, información sobre la naturaleza, el calendario y el alcance de los procedimientos de auditoría previstos, incluidos los de evaluación del riesgo, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios específicos.

El plan de auditoría proporcionará información detallada sobre el modo de obtener pruebas suficientes para respaldar el dictamen de auditoría, e incluirá la evaluación del riesgo de que se produzcan errores significativos.



- 3) **Trabajos de auditoría.** El enfoque de la auditoría a realizar, las etapas de ésta, los métodos de auditoría que deben aplicarse y su alcance, deben ajustarse a lo que establezcan las directrices aplicables de la Comisión.

En base al trabajo de auditoría realizado se deberá poder concluir sobre los siguientes objetivos de auditoría:

Objetivo 1 – Auditoría de las cuentas anuales

Los resultados correspondientes a este objetivo de auditoría, permitirán certificar que:

- las cuentas que deben enviarse a la Comisión ofrecen una imagen fidedigna,
- los procedimientos de control internos del OP han funcionado satisfactoriamente.

Los principales procedimientos de auditoría se dirigirán a:

- revisar el SCI (prueba de sistemas informáticos, procedimientos, pruebas de cumplimiento, etc);
- realizar pruebas sustantivas de transacciones operativas y no operativas;
- revisar las conciliaciones financieras;
- realizar la evaluación general de errores; y,
- otras comprobaciones (financiación nacional adicional, Intereses generados por la prefinanciación).

Objetivo 3 (según directriz 3B aplicable) – Legalidad y regularidad del gasto, incluida la declaración sobre la gestión

Los resultados correspondientes a este objetivo de auditoría, permitirán certificar que:

- el gasto en relación con las medidas establecidas en los Reglamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) n.º 229/2013, (UE) n.º 1308/2013 y (UE) n.º 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de conformidad con el artículo 12, letra d), del Reglamento (UE) 2021/2116 (es decir, los

gastos ajenos a los planes estratégicos de la PAC), en relación con el pago específico al cultivo del algodón y la ayuda al cese anticipado en virtud del título III, capítulo II, sección 3, subsección 2, y del artículo 155, apartado 2, respectivamente, del Reglamento (UE) 2021/2115, y en relación con gastos derivados de medidas o regímenes aprobados antes del 1 de enero de 2023 cuyo reembolso se haya solicitado a la Comisión, es legal y regular, y

- los procedimientos de control internos del OP han funcionado satisfactoriamente.

Los principales procedimientos de auditoria se dirigirán a:

- revisar el sistema de control interno (pruebas de procedimientos, pruebas de cumplimiento);
- realizar pruebas sustantivas que permitan la verificación de la autorización de los pagos (controles administrativos y sobre el terreno);
- la revisión de los informes de gestión (estadísticas de control y otros informes de control, y declaración sobre la gestión);
- evaluación de la tasa general de incumplimiento; y,
- seguimiento de las recomendaciones de años anteriores.

- 4) Análisis de la **decisión de liquidación y respuesta** a observaciones. Una vez presentado el informe y dictamen, el adjudicatario deberá facilitar la información necesaria para atender los requerimientos que los servicios de la Comisión Europea realicen, analizará las observaciones formuladas en la decisión de liquidación de cuentas y, cuando proceda efectuar alegaciones y/o aclaraciones, elaborará la respuesta a las mismas.

Los trabajos de auditoría incluyen la realización de todos los procedimientos, tareas, pruebas, métodos, etapas, controles, reverificaciones de controles sobre el terreno y resultados previstos en la directrices nº 2 y nº 3B conforme a las orientaciones incluidas en las mismas y en sus anexos.



En la Comunidad de Madrid no se han empleado fondos del programa de desarrollo rural 2014-2020 para ejecutar instrumentos financieros (art. 37 del Reglamento (UE) 1303/2013).

La revisión de los componentes de la acreditación incluye la revisión de la seguridad de los sistemas de la información.

Para la valoración del sistema de control interno se tendrán en cuenta los controles fundamentales y auxiliares definidos por la Comisión Europea.

La empresa adjudicataria llevará a cabo el trabajo necesario para identificar las poblaciones y extraer las muestras de todas las pruebas y controles a realizar. Esto incluye, entre otros:

- determinar los objetivos de las pruebas;
- definir la población, la unidad de muestreo y si procede la condición de desviación;
- analizar la representatividad de las muestras;
- definir los parámetros y métodos de muestreo;
- atendiendo a las características de las poblaciones, la posibilidad de efectuar estratificación, trabajar en varios períodos, etc;
- determinar el tamaño de la muestra;
- seleccionar la muestra;
- proyectar los resultados, calcular la precisión y extraer conclusiones;
- analizar los resultados e integrarlos en la auditoría del cierre del programa de desarrollo rural, incluyendo la determinación de los errores, su impacto financiero, y su extrapolación;
- efectuar las comprobaciones y ajustes necesarios.

Corresponde a la empresa adjudicataria la categorización, consolidación e interpretación de los errores y constataciones, así como la elaboración de los resultados y conclusiones y la formulación de la propuesta de dictamen de auditoría.

Los resultados se reflejarán utilizando los modelos y sistemas de puntuación establecidos en las directrices de la Comisión y la aplicación System for Fund Management in the European Union (SFC).

Deberá efectuarse el seguimiento de las medidas necesarias para atender las incidencias y recomendaciones efectuadas en los informes de los ejercicios precedentes, así como el seguimiento de la recuperación de los importes irregulares detectados.

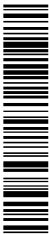
Finalmente, el adjudicatario debe facilitar la información necesaria para atender los requerimientos que en cualquier momento puedan ser solicitados por organismos nacionales o internacionales, como pueden ser los servicios de la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, IGAE, etc.

6. DOCUMENTACIÓN Y PAPELES DE TRABAJO

El trabajo ejecutado se recogerá en los correspondientes papeles de trabajo. Éstos deben ser claros, legibles, precisos, concisos y comprensibles. Se archivarán de forma ordenada en las correspondientes carpetas informáticas por cada una de las áreas, líneas o controles.

Los documentos de trabajo, en los que costarán los auditores que hubieran intervenido en su cumplimentación y la fecha, deberán prepararse de tal forma que puedan utilizarse como pruebas en cualquier procedimiento legal que pudiera iniciarse. Así mismo, se deberá indicar claramente quién lo ha revisado, cuándo y cuál fue el resultado de la revisión. Deberán conservarse todas las notas de los auditores que indiquen conformidad o aspectos incompletos o poco claros.

Es necesario que los documentos de trabajo contengan información sobre el enfoque empleado y el trabajo llevado a cabo para responder a las preguntas de auditoría, y que estén estructurados con lógica, a efectos de proporcionar un acceso directo a las pruebas de auditoría. Igualmente, es esencial contar con una documentación adecuada, que deberá estar completa antes del envío al Director del Trabajo y, posteriormente, al organismo pagador y/o beneficiarios, de los borradores de informes, para contribuir, de esta forma, a garantizar que dichas constataciones se basan en pruebas.



La opinión del auditor deberá estar sustentada en la documentación soporte y en los papeles de trabajo que contengan evidencia suficiente, pertinente y válida, obtenida de la aplicación y evaluación de las pruebas de auditoría que se hayan realizado para obtener una base de juicio razonable para los distintos objetivos fijados en los trabajos de auditoría previstos.

Para la elaboración de los papeles de trabajo se tendrán en cuenta las Normas Internacionales de Auditoría.

Es responsabilidad de la empresa auditora el establecimiento de los sistemas, políticas y procedimientos de control de calidad que le proporcionen una seguridad razonable de que la auditoría cumple las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios y que el informe emitido por el auditor es adecuado en función de las circunstancias, de conformidad con la NIA 220 de control de calidad de la auditoría de estados financieros.

Los documentos que deben entregarse como resultado de la ejecución de los trabajos son:

- Estrategia global de auditoría y plan de auditoría.
- Informe sobre la seguridad de los sistemas informáticos.
- Borradores del informe de auditoría y dictamen.
- Informe definitivo y sus anexos, en un formato ajustado a los epígrafes de la orientación 3B y al formato del informe en SFC2021.
- Papeles de trabajo y documentación soporte.
- Documento de constataciones menores y recomendaciones.
- Análisis y, si procede, respuesta las observaciones y recomendaciones realizadas por la Comisión Europea en la decisión de liquidación.

Los documentos que deben entregarse como resultado de la ejecución de reverificaciones in-situ de controles sobre el terreno, para cada uno de los expedientes son:

- Informe en el que se detallarán los resultados obtenidos y su comparación con los considerados por el organismo pagador y, en su caso, el importe, de la incidencia financiera detectada.



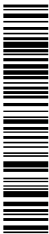
- Pruebas de las comprobaciones realizadas: actas de control, capturas de pantalla, fotografías geolocalizadas, documentos, planos, croquis, mediciones, etc.

Además, el adjudicatario deberá aportar los informes, memorias, aclaraciones o documentación adicional que sea necesaria para atender posibles requerimientos de la Comisión Europea, del Tribunal de Cuentas Europeo o de autoridades nacionales en relación a los trabajos objeto del contrato.

7. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

La dirección, supervisión y seguimiento de los trabajos será realizada por personal de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

- Entre las facultades de la dirección de los trabajos se encuentran las de adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización del contrato de conformidad con los pliegos.
- El personal adscrito por la empresa auditora al contrato ejecutará los trabajos de acuerdo con lo establecido en las cláusulas de este pliego y en los programas de trabajo de auditoría aprobados, cuya correcta cumplimentación podrá ser objeto de comprobación.
- Al efecto de asegurar el correcto desarrollo de los trabajos encomendados, la empresa auditora pondrá inmediatamente en conocimiento de la Intervención General cualquier limitación al alcance o incidencia significativa que encuentre, con el fin de adoptar las medidas que procedan.
- La firma auditora debe facilitar el acceso a la información que se estime necesaria para poder llegar a conclusiones respecto a las técnicas empleadas, procedimientos y resultados del trabajo, con la finalidad de poder tener evidencia de la calidad del trabajo ejecutado. A tales efectos, se podrá disponer la presencia de personal de la Intervención General durante la realización de determinados trabajos o pruebas.
- La firma auditora facilitará todo tipo de información al objeto de que la dirección tenga un conocimiento global y puntual de todos los procedimientos y técnicas empleadas, así como de los resultados y conclusiones.



- f) En caso de observar en los trabajos realizados que no se han aplicado los procedimientos de control apropiados o existen errores o insuficiencias en dicha aplicación, se requerirá a la firma auditora que subsane de forma inmediata las deficiencias. Si se observase la falta de diligencia en la subsanación de las deficiencias que pueda suponer un incumplimiento del plazo de ejecución previsto en este pliego o en el de cláusulas administrativas, podrá proponerse al órgano de contratación, bien la resolución del contrato, bien la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares. A estos efectos se podrá proponer al órgano de contratación el inicio de las actuaciones destinadas a imponer dichas penalidades cuando, en su caso, se tenga que revisar más de dos veces la documentación presentada.
- g) La firma de auditoría emitirá un borrador del informe de auditoría a la dirección de los trabajos. A la vista del contenido del citado borrador, en su caso, se comunicará la necesidad de subsanación de los errores o inexactitudes que pudieran apreciarse, las aclaraciones que se estimen oportunas y, en su caso, las sugerencias que considere pertinentes en orden a lograr una mayor calidad y claridad expositivas, pudiendo, asimismo, requerir al auditor privado la ampliación del contenido del borrador, así como la realización de pruebas adicionales. Asimismo, la dirección de los trabajos indicará el plazo para la remisión del nuevo borrador que contemple las correcciones o ampliaciones planteadas. Si se observase la falta de adecuación del nuevo borrador que suponga la necesidad de emitir observaciones y, por tanto, revisar el borrador de informe de forma recurrente, que pueda suponer un incumplimiento del plazo de ejecución previsto en este pliego o en el de cláusulas administrativas, podrá proponer al órgano de contratación, bien la resolución del contrato, bien la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas. A estos efectos la dirección de los trabajos podrá proponer al órgano de contratación el inicio de las actuaciones destinadas a imponer dichas penalidades cuando se tenga que revisar más de dos veces el borrador del informe.
- h) La empresa adjudicataria quedará comprometida a asistir a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, si fuera requerida para ello, en el supuesto de que la Comisión u otros órganos nacionales o internacionales, solicitase aclaraciones o informes adicionales sobre el trabajo realizado o dispusiera la realización de misiones de auditoría u otro tipo de control

sobre las cuentas o el trabajo de auditoría realizado objeto del presente contrato.

La empresa permitirá a los órganos nacionales e internacionales indicados en el párrafo anterior, y en particular a la IGAE y la IGCM, el acceso a los papeles de trabajo y demás soportes documentales e informáticos.

- i) Cualquier modificación que se proponga en la composición de los equipos de trabajo deberá reunir los requisitos señalados en el pliego de cláusulas administrativas particulares y ser autorizada previamente por la Intervención General de la Comunidad de Madrid. Si la Intervención General comprobara que alguno de los miembros del equipo no reúne alguna de las condiciones requeridas, podrá optar por la resolución del contrato o el ejercicio de las penalidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
- j) La empresa adjudicataria debe comunicar inmediatamente aquellos errores, incidencias o irregularidades financieras detectados en el curso del trabajo que pudieran resultar en la imposibilidad de certificar las cuentas del organismo pagador de la Comunidad de Madrid. En su caso, la empresa está obligada a la realización de las pruebas y trabajos adicionales para delimitar los errores.

8. CONTROL DE CALIDAD

De conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, en particular de las NIA 600 *Consideraciones especiales -Auditorías de estados financieros de grupos (incluido el trabajo de los auditores de los componentes)* y NIA 620 *Utilización del trabajo de un experto del auditor*, la Intervención General de la Comunidad de Madrid, efectuará el control de calidad de los trabajos realizados por la firma auditora.

9. INDEPENDENCIA

La Resolución de 28 de abril de 2022 de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por la que se desarrolla el principio de independencia

para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que se incluye como Anexo A, establece que en el caso de que de que se contraten empresas auditoras de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, deberán incluirse en los documentos contractuales que correspondan (pliegos, contrato, etc.) el siguiente contenido:

- a) Se facilitará a las empresas de auditoría privada en los trabajos en que colaboren en virtud de la citada disposición adicional séptima la información sobre la regulación de la protección de la independencia y la incompatibilidad que figuran en la presente resolución y les exigirá que documenten la protección de la independencia y la incompatibilidad en las mismas condiciones que si se tratara de personal dependiente de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.*
- b) A los efectos de aplicar los criterios de esta resolución a los miembros del equipo de la empresa privada se les considerará personas que son susceptibles de generar influencia, en los términos establecidos en el apartado 3 del Anexo I.*
- c) Considerando la existencia de salvaguardas regulatorias en el caso de los empleados públicos que no están establecidas en las empresas de auditoría privada, se aplicarán supletoriamente las disposiciones existentes en la regulación de auditoría de cuentas siempre que no vulneren las normas sobre independencia fijadas en la regulación pública. En particular, se emplearán supletoriamente mediante la correspondiente adaptación, los criterios que figuran en los artículos 19, 20, 23 y 24, referidos a incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría, las que se derivan de personas relacionadas con la red del auditor o sociedad de auditoría, las prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría, y las relacionadas con los honorarios de auditoría, de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y el desarrollo reglamentario. Asimismo, se aplicarán los criterios de rotación y limitaciones relativas a las contrataciones sucesivas de auditores para la realización de trabajos sobre una misma entidad establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid.*
- d) La extensión temporal de las amenazas a la independencia o a la incompatibilidad se contarán desde la fecha del inicio del ejercicio anterior al controlado hasta la fecha del informe de auditoría o documento similar y las prohibiciones se extenderán durante dos años contados desde la fecha de emisión del informe o documento equivalente.*



- e) *No obstante, lo indicado en los apartados a) a d) anteriores, la valoración de los riesgos de amenazas a la independencia y a la incompatibilidad partirán de la autoevaluación de las empresas privadas de auditoría. Dicha autoevaluación será revisada por la subdirección general de control financiero, o por la intervención delegada de fondos europeos quienes en atención al interés público en la ejecución de los trabajos podrán considerar salvaguardas que mitiguen los efectos de aplicar en el contexto de la auditoría en el sector público, criterios establecidos por la regulación de auditoría privada.*
- f) *No resultarán de aplicación a las empresas de auditoría contratadas y a su personal, las leyes y los reales decretos de carácter general mencionados en el Anexo II de esta resolución.*

La citada Resolución se incluye como Anexo A de este pliego.

10. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El adjudicatario no puede utilizar para sí, ni proporcionar a terceros, datos obtenidos en el curso de la realización de los trabajos objeto del contrato, debiendo observar reserva absoluta sobre la información obtenida, así como garantizar el respeto de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Quienes intervengan en cualquier fase de la ejecución del contrato quedarán obligados al secreto profesional respecto a datos personales, económicos, comerciales u otra información. Esta obligación subsistirá aun después de finalizar la relación contractual, así como la renuncia expresa de los derechos de propiedad intelectual que les pudiera corresponder y el compromiso del cumplimiento de las obligaciones de protección de datos de carácter personal.

El adjudicatario está obligado, con carácter general, por el deber de confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal y de otros datos de carácter confidencial que pueda tratar. En particular:

- El adjudicatario y el personal encargado de la realización de las tareas guardarán y asegurarán la confidencialidad, disponibilidad e integridad sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, no revelando, transfiriendo o cediendo, ya sea verbalmente o por escrito, cuantos datos



conozcan como consecuencia de la prestación del servicio, sin límite temporal alguno.

- El uso de los datos de carácter personal, o de otra índole, a los que tenga acceso el adjudicatario serán utilizados única y exclusivamente para las finalidades contempladas en el contrato.
- Garantizará la formación en materia de protección de datos del personal adscrito a la ejecución del contrato con acceso a datos de carácter personal.

El adjudicatario limitará el acceso o tratamiento de datos de carácter personal incluido en los ficheros bajo titularidad de la Comunidad de Madrid, a aquel que se requiera imprescindiblemente para la prestación del servicio y/o de las obligaciones contraídas, y en todo caso limitándose a los datos que resulten estrictamente necesarios.

Sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir el contratista, el incumplimiento de la obligación de confidencialidad y del respeto de la normativa de protección de datos, se establece como obligación de carácter esencial conforme al artículo 211.1 f) la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que su incumplimiento sería causa de resolución del contrato.

En el Anexo B se incluyen cláusulas relativas al encargo de tratamiento de datos de carácter personal.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución es de 12 meses a contar desde el 1 de enero de 2026, o a partir de la formalización del contrato en caso de efectuarse ésta en fecha posterior.

En el plazo de tres meses tras la firma del contrato la empresa efectuará la redacción de la estrategia de auditoría y del plan de auditoría. Éstos contendrán el programa de trabajo que debe incluir los objetivos de auditoría por área del trabajo.

La ejecución del trabajo se planificará a fin de que los informes y los dictámenes puedan ser emitidos y remitidos a la Comisión por el Estado miembro con anterioridad al 30 de junio de 2026.

Los borradores del informe y del dictamen se entregarán con anterioridad al 31 de mayo de 2026.

La entrega del dictamen e informe definitivos, tras haber sido sometido éste a procedimiento contradictorio, deberá realizarse antes del 16 de junio de 2026. No obstante, la entrega deberá adaptarse a los plazos que se puedan establecer para la tramitación de la documentación ante la Comisión Europea.

El análisis y, si procede, respuesta a las observaciones establecidas en la decisión de liquidación de cuentas de la Comisión Europea deberá redactarse en el plazo establecido en la misma.

EL INTERVENTOR GENERAL

Firmado digitalmente por: FRANCISCO JAVIER CARMENA LOZANO - ***3259**
Fecha: 2025.07.29 12:24

ANEXO A

RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2022 DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR LA QUE SE DESARROLLA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE CONTROL ATRIBUIDAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.





Intervención General
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo

Comunidad de Madrid

RESOLUCIÓN DE 28 DE ABRIL DE 2022 DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR LA QUE SE DESARROLLA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE CONTROL ATRIBUIDAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

La Intervención General de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus funciones actúa con plena autonomía e independencia respecto de las autoridades y demás entidades sobre las que ejerce el control interno.

El principio de autonomía o independencia del personal de la Intervención General en el desarrollo del control es fundamental para asegurar la confianza pública en la fiabilidad de sus resultados e informes, a la vez que garantiza que el ejercicio de sus funciones esté sometido a estrictos criterios técnicos y profesionales, acompañados de sólidos principios éticos, en especial los de integridad y objetividad.

El artículo 16 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, establece el principio de autonomía de la Intervención General de la Comunidad respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión fiscalice. Por su parte, el Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, cuando relaciona los principios aplicables al control interno –artículo 3.2- extiende dicho principio a todo el control interno, no sólo a la fiscalización, indicando, además, que *“A tales efectos, los funcionarios que realicen el mismo tendrán independencia funcional y jerárquica respecto de los titulares de las entidades cuya gestión controlen”*.

No obstante, el reconocimiento del principio de independencia no basta por sí mismo, siendo necesario su desarrollo en normas concretas que identifiquen los riesgos y establezcan sistemas internos de salvaguarda y control que garanticen su respeto, de forma que se asegure la confianza pública en la profesionalidad y la fiabilidad de la actuación y los resultados de la labor de control del personal de la Intervención General de la Comunidad de Madrid

En el ámbito de la actividad administrativa ya existe un conjunto de normas para la salvaguarda de la actuación de los empleados públicos, resultando oportuno, en este momento, aprobar una norma específica sobre la protección del principio de independencia para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid mediante la presente resolución, presidida por la idea de que no podrán participar ni influir en el desarrollo y resultado de las actuaciones de control, aquellas personas que tengan una relación con el órgano o entidad controlados que pueda generar un conflicto de intereses o ser percibida, generalmente, como causante de un conflicto de intereses.

Con carácter general, en el derecho comunitario -Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, y demás acervo comunitario- se hace referencia en numerosas ocasiones al concepto conflicto de intereses.





En el concreto ámbito del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ha dictado la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para la ejecución de dicho Plan los Estados miembros de la Unión Europea -beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia-, adoptarán todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión y para asegurar que la utilización de los fondos en relación con las medidas financiadas por el Mecanismo se ajuste al Derecho aplicable de la Unión y nacional, en particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como la exigencia de establecer un sistema de control eficaz y eficiente que permita recuperar los importes abonados erróneamente o utilizados de modo incorrecto.

La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias, ha aprobado un Plan de medidas antifraude, en el que se establece que *“todas las autoridades y el personal de la Comunidad de Madrid que intervengan en la gestión y ejecución de subproyectos y actuaciones financiadas con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cumplimentarán la declaración de ausencia de conflicto de intereses.”*

En lo que se refiere al control el Plan de medidas antifraude (al igual que la Orden 1030/2021) se estructura en tres niveles: control realizado por el órgano gestor (nivel I); control interno realizado por órgano independiente (nivel II); auditorías y controles *ex post* (nivel III). La declaración de ausencia de conflicto de intereses. –DACI-, no se exige a los órganos que realizan el control de nivel II y III, pero esto no puede entenderse, de ningún modo, como una menor exigencia respecto a los órganos de control independientes, sino todo lo contrario, ya que se está subrayando y reforzando la imagen de escrupulosidad, imparcialidad y neutralidad de la Intervención.

Ello reafirma la necesidad de dictar una resolución sobre independencia del personal de la Intervención General para disponer de una norma adecuada al momento actual y futuro, dada su vocación de permanencia.

En el ámbito estatal se ha dictado la Resolución de 20 de septiembre de 2017, por la que se desarrolla el principio de independencia para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Administración del Estado. A su vez, las especialidades del régimen del control financiero y de las funciones de auditoría, recogidas en la normativa específica de auditorías del sector público, ha motivado que, en desarrollo de la citada Resolución se hayan dictado dos Instrucciones para regular el principio de independencia de forma específica, por una parte, para el ejercicio de la función interventora y por otra, para el control financiero, auditoría y el control de fondos europeos.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, considerando adecuado dicho planteamiento, se ha adoptado el mismo criterio, conteniendo la presente resolución una primera sección que establece las líneas de actuación generales que son comunes a las diferentes formas de control para reforzar la independencia en las actuaciones, regulando en la sección segunda las características específicas para la función interventora y en la sección tercera las correspondientes a control financiero, auditoría y el control de fondos europeos.





Se incorporan nueve anexos, los dos primeros comunes a ambos tipos de control, en los que se recogen las definiciones de términos incluidos en la resolución (Anexo I) y la regulación pública general más relevante relacionada con la independencia y la incompatibilidad (Anexo II). Los Anexos III y IV, son específicos para el personal de la Intervención General sometido a las disposiciones recogidas en la sección segunda y los Anexos del V al IX, específicos para el personal sometido a las disposiciones de la sección tercera de la presente resolución.

En consideración a lo expuesto y al fin señalado, esta Intervención General, en ejercicio de la competencia establecida en el artículo 34 h) del Decreto 234/2021, de 10 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, dispone:

Sección Primera ***Normas comunes***

Primero. Objeto.

1. La presente resolución tiene por objeto el desarrollo del principio de independencia que ha de regir el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en los términos previstos en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y su normativa de desarrollo, sobre la gestión económico-financiera del sector público autonómico, mediante el ejercicio de la función interventora, el control financiero y auditoría y el control de los fondos de la Unión Europea.

2. En el Anexo I de esta resolución se recogen las definiciones en materia de protección de la independencia y la incompatibilidad y en el Anexo II se relaciona la regulación pública más relevante relacionada con dichos conceptos, siendo estos dos Anexos comunes para todo tipo de control.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Las normas incluidas en esta resolución serán de aplicación a todo el personal dependiente de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de las funciones de control atribuidas a este centro directivo, en concreto la función interventora, el control financiero, la auditoría y el control de los fondos europeos.

Tercero. Principio general de independencia.

1. El personal de la Intervención General de la Comunidad de Madrid comprendido en el ámbito de aplicación de esta resolución, en el ejercicio de sus funciones de control, actuará con independencia respecto de los órganos, unidades y entidades objeto de control, actuando con total objetividad.

2. La presente resolución establece los mecanismos generales que permiten detectar e identificar las amenazas a la independencia.

3. Para garantizar el principio de independencia se establece que no podrán participar ni influir, de ninguna manera, en el desarrollo y resultado de las actuaciones de control, aquellas





personas que tengan una relación con el órgano o entidad controlado que pueda generar un conflicto de intereses o ser percibida, generalmente, como causante de un conflicto de intereses.

Cuarto. Riesgos para la independencia.

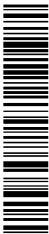
1. Es objeto de la presente resolución prevenir no solo las situaciones de incompatibilidad sino también el riesgo de amenaza a la independencia.
2. Las amenazas a la independencia podrán proceder de factores como la autorrevisión, interés propio, familiaridad o confianza, o intimidación, derivados de la existencia de conflictos de intereses o de alguna relación laboral, familiar o de otra clase, ya sea directa o indirecta.
3. El personal controlador deberá realizar, con la periodicidad y procedimientos que se definen en la presente resolución en función del tipo de control, un análisis de su situación respecto al ente objeto de control a efectos de identificar posibles amenazas a la independencia. Estos análisis deberán documentarse en función de las normas que se establecen para cada tipología de control.

Quinto. Circunstancias de incompatibilidad del personal controlador.

1. En todo caso, los empleados públicos que desempeñen funciones de control de las sometidas al ámbito de aplicación de esta resolución no podrán tener simultáneamente la condición de miembro del órgano de administración de ninguna de las entidades del sector público que constituyan el ámbito subjetivo de control al que estén adscritos.

En consecuencia, el personal indicado no podrá aceptar el nombramiento como administrador o deberá renunciar a él en el plazo máximo de un mes desde su incorporación a un puesto de trabajo de la Intervención General.

2. Existirá incompatibilidad para participar directamente en actuaciones de control en la entidad de que se trate, cuando se tenga o se haya tenido la condición de miembro del órgano de administración o se haya desempeñado un puesto de trabajo de alta dirección o de alto cargo en la entidad objeto de control, en los dos años anteriores al inicio de la actuación de control. También concurrirá esta circunstancia cuando se hubieran desempeñado funciones de responsable del área económica financiera o de supervisión o control interno en la entidad objeto de control, en los dos años anteriores al inicio de la actuación de control, cualquiera que sea el vínculo con la entidad.
3. Existirá incompatibilidad para participar directamente en actuaciones de control en las entidades u órganos en las que el personal de control tenga vínculos familiares estrechos con personas que pertenezcan a los órganos de administración o sean altos cargos, desempeñen puestos de trabajo de alta dirección, sean responsables del área económico-financiera o responsables de las funciones de supervisión o control interno en la entidad objeto de control, cualquiera que sea el vínculo que tuvieran con dicha entidad.





A efectos de esta resolución, se entiende por familiares con vínculos estrechos los cónyuges o quienes mantengan análoga relación de afectividad, quienes tengan vínculos de consanguinidad en primer grado y quienes, con independencia del grado, tengan vínculos de consanguinidad y vivan en su hogar durante un período mínimo de un año.

4. El personal controlador que esté incurso en una circunstancia de la que derive incompatibilidad deberá comunicarlo inmediatamente a la subdirección general de control financiero, o en su caso, a la intervención delegada, o unidad de control material de la inversión correspondiente. Si la causa de incompatibilidad concurrese en el titular de la subdirección general de control financiero o en el jefe de la intervención delegada o de la unidad de control material de la inversión, se deberá comunicar a la Intervención General de la Comunidad de Madrid por conducto de la subdirección general de intervención y fiscalización.

Sexto. Circunstancias que generan amenazas a la independencia del personal controlador.

1. Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias o situaciones en el personal controlador que participe directamente en los trabajos, se deberán ejecutar los procedimientos de evaluación de amenazas a la independencia a los efectos de aplicar, en su caso, las correspondientes salvaguardas:

1.º Tener vínculos familiares estrechos con personal perteneciente al órgano controlado, distintos de los señalados en el epígrafe 3 del anterior apartado quinto.

2.º Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con los gestores o responsables de la entidad, o tener una cuestión litigiosa con la entidad controlada o con alguno de sus directivos.

3.º Estar incurso en procesos judiciales penales por hechos cometidos en el ejercicio de actuaciones competencia de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

4.º Realizar actuaciones de control que afecten a decisiones o trabajos realizados anteriormente en la entidad objeto de control.

No se considera amenaza a la independencia la realización simultánea o sucesiva de las distintas modalidades de control competencia de la Intervención General de la Comunidad de Madrid sobre una misma entidad.

5.º La asistencia a órganos colegiados en la entidad objeto de control, salvo que se cumplan alguno de los siguientes requisitos:

i. Actuaciones previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica-financiera del sector público autonómico, distintas de las de control, atribuidas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y sus Intervenciones Delegadas

ii. Que no tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca importancia relativa, por separado o de forma agregada, en las actuaciones objeto de control.





iii. Cualesquiera otras actividades derivadas de las competencias asignadas en las leyes que se hagan en el entorno o como complemento de la función interventora o de las actuaciones de control financiero, auditoría pública, o control de fondos de la Unión Europea.

6.º Haber tenido una relación laboral con la entidad objeto de control en los dos años anteriores al inicio de la actuación de control.

2. La detección de la existencia de los riesgos señalados no excluye la posibilidad de que hubiera otros de similar naturaleza o efectos que también, una vez documentados y descritos de forma precisa, pudieran afectar a la independencia. Sin perjuicio de lo indicado, en ningún caso se tendrán en consideración riesgos de carácter genérico o inespecífico cuyo efecto no pueda ser concretado o evaluado.

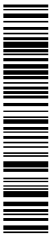
Séptimo. Procedimiento de identificación y comunicación de situaciones de riesgo.

1. En el caso de que, del análisis de las situaciones de riesgo, el personal de la Intervención General en el ejercicio de sus funciones de control detectara una amenaza a la independencia, lo comunicará inmediatamente, en función del ámbito orgánico en el que se encuentre, al titular de la subdirección general de control financiero, o en su caso, de la de unidad de control material de la inversión o de la intervención delegada correspondiente, los cuales adoptarán las medidas para que la participación en las actuaciones de control queden suspendidas.

2. Si las medidas adoptadas no son suficientes para mitigar, eliminar o reducir a niveles razonables el riesgo o si las amenazas concurren en el subdirector general de control financiero, o en el jefe de la unidad de control material de la inversión o de la intervención delegada, la comunicación se trasladará al titular de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Madrid por conducto de la subdirección general de intervención y fiscalización.

3. Asimismo, los responsables de las unidades o entidades objeto de control podrán poner, de forma motivada y documentada, en conocimiento del responsable de la actuación de control aquellas situaciones en las que entienda que la independencia del personal controlador pudiera verse comprometida. El responsable del control analizará dicha comunicación y adoptará las medidas para que la participación en las actuaciones del personal afectado quede suspendida.

Si las medidas adoptadas no son suficientes para mitigar, eliminar o reducir a niveles razonables el riesgo o si las amenazas concurren en el subdirector general de control financiero, o en el jefe de la unidad de control material de la inversión o de la intervención delegada, la comunicación se trasladará al titular de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Madrid por conducto de la subdirección general de intervención y fiscalización.





Octavo. Deber de colaboración.

1. Todos los funcionarios y personal de los órganos y unidades de la Intervención General de la Comunidad de Madrid deberán prestar a los órganos responsables de las unidades de control, o en su caso, a la Intervención General la máxima colaboración para el mejor cumplimiento de sus funciones.

2. Los órganos responsables de las unidades de control y la Intervención General, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la documentación e información de que dispongan los órganos y unidades objeto de control, cualquiera que sea su naturaleza. Dicho acceso quedará limitado al ámbito estricto del objeto de los controles para garantizar la independencia del personal controlador, sin que en ningún caso pueda extenderse a datos que afecten a la intimidad de las personas o a los derechos de terceros.

Noveno. Responsabilidades.

El personal de la Intervención General de la Comunidad de Madrid que no comunique las circunstancias de incompatibilidad o de amenaza a la independencia estará sujeto a las responsabilidades que procedan.

Sección segunda
Normas relativas a la función interventora

Décimo. Función interventora.

Las normas contenidas en la presente sección se refieren al principio de independencia para el ejercicio de las funciones de control atribuidas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la función interventora, incluidas las ejercidas por la unidad de control material de la inversión.

También se entenderán incluidas en esta sección las funciones de control posterior realizadas por las intervenciones delegadas en su ámbito de control, en los casos en los que la modalidad de control sea fiscalización previa de requisitos esenciales, así como cuando la modalidad de fiscalización previa se sustituya por control financiero permanente.

Decimoprimer. Autoevaluaciones y comunicaciones.

1. El personal que realice funciones interventoras deberá efectuar una autoevaluación que consistirá en el análisis de su situación respecto del ámbito objeto de control en la unidad de control a la que esté asignado, a efectos de identificar posibles situaciones de incompatibilidad o amenazas a la independencia.

A efectos de documentar esta autoevaluación, dicho personal deberá cumplimentar y presentar la declaración firmada conforme al modelo aprobado en el Anexo III de la presente resolución (confirmación de independencia del personal de la intervención delegada o unidad de control material de la inversión en actuaciones relativas al ejercicio de la función interventora), con ocasión de la adscripción a cada una de las unidades de control a las que sean designados.





2. Si, como resultado de dicha autoevaluación, el empleado público considerase que concurren en su persona circunstancias de incompatibilidad o riesgo para la independencia lo comunicará inmediatamente y, en todo caso, antes de realizar cualquier actuación de control al titular de su unidad administrativa conforme al modelo establecido en el Anexo IV, relativo a la comunicación de situaciones de incompatibilidad o de amenaza a la independencia del personal de la intervención delegada o unidad de control material de la inversión, en actuaciones relativas al ejercicio de la función interventora.

3. En el caso de que, con posterioridad a dicha autoevaluación, se produzca una situación sobrevenida de incompatibilidad o riesgo para la independencia se comunicará igualmente según lo establecido en dicho Anexo IV.

Se entiende por titular de la unidad administrativa, en las intervenciones delegadas el interventor delegado jefe y en la unidad de control material de la inversión, el jefe de dicha unidad.

El titular de la unidad administrativa valorará la adopción de medidas que mitiguen, reduzcan o eliminen el riesgo en cuyo caso no será necesaria comunicación a la Intervención General, si bien deberá dejarse constancia documental de las medidas adoptadas junto con la comunicación realizada por el personal afectado.

Si las medidas adoptadas no son suficientes para mitigar, eliminar o reducir a niveles razonables el riesgo o si las circunstancias concurren en los interventores delegados jefes o en el jefe de la unidad de control material de la inversión, las circunstancias se comunicarán a la Intervención General por conducto de la subdirección general de intervención y fiscalización.

Decimosegundo. Documentación de las comunicaciones.

El titular de cada unidad administrativa llevará un seguimiento y archivo de la documentación relativa a las comunicaciones que se produzcan en su unidad, en relación con su personal, así como de ellos mismos.

Decimotercero. Órganos competentes.

1. En los casos previstos en los puntos 2 y 3 del apartado decimoprimer de esta resolución se tramitará el oportuno procedimiento, cuya resolución determinará si existe o no causa de incompatibilidad o riesgo para la independencia en la persona del empleado público que ha efectuado la comunicación y, en caso afirmativo, se determinará el alcance y extensión de la misma.

Para ello, será competente para resolver el correspondiente procedimiento el titular de la unidad administrativa.

En el supuesto de que las causas de incompatibilidad o riesgo para la independencia afectaran al titular de la unidad administrativa el órgano competente para su resolución será el titular de la Intervención General de la Comunidad de Madrid. En estos casos para su comunicación se utilizará el modelo del Anexo IV de esta resolución.





2. En el caso de que el personal de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus funciones de control, detectara una amenaza a la independencia, lo comunicará inmediatamente, a los órganos citados en el epígrafe 1 de este apartado junto con una memoria en la que exprese su opinión sobre la relevancia de las circunstancias de incompatibilidad o riesgo para la independencia.

Decimocuarto. Procedimiento.

1. El procedimiento de identificación de situaciones de riesgo a la independencia o incompatibilidad se iniciará, en todo caso, cuando se reciba la comunicación a la que se refieren los epígrafes 2 y 3 del apartado decimoprimer de esta resolución.

También se podrá iniciar, motivadamente, por decisión del órgano competente cuando se tenga conocimiento o se detecte alguna causa de incompatibilidad o riesgo para la independencia en alguno de los empleados públicos que realiza funciones interventoras competencia de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

2. La resolución que inicie el procedimiento podrá determinar, en su caso, de forma motivada, las medidas cautelares que se consideren oportunas.

3. En el plazo de 10 días hábiles el órgano competente dictará resolución en la que deberá señalar si existe o no incompatibilidad o riesgo para la independencia y, en su caso, las medidas a adoptar o la declaración de una situación de incompatibilidad que impida participar en las actuaciones de control.

Sección tercera

Normas relativas al control financiero, auditoría y control de fondos europeos

Decimoquinto. Control financiero, auditoría y control de fondos europeos

Las normas contenidas en la presente sección se refieren al principio de independencia para el ejercicio de las funciones de control financiero, auditoría y control de los fondos europeos atribuidas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

Decimosexto. Ámbito de aplicación.

Las normas incluidas en la presente sección serán de aplicación a todo el personal dependiente de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de las funciones de control financiero, auditoría y control de los fondos europeos.

Decimoséptimo. Normativa aplicable.

Las actuaciones de control financiero, reguladas por la Ley 9/1990, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, el Decreto 45/1997, por el que se desarrolla el Régimen del Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y por la normativa estatal y de la Unión Europea que sea aplicable, se desarrollará de acuerdo





con lo establecido en la Circular 2/1997, de 27 de junio, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de Control Financiero, en las Normas de Auditoría del sector público y en las instrucciones y criterios que establezca la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

Decimoctavo. Situaciones que generan riesgos de amenaza a la independencia.

Además de las recogidas en los apartados cuarto y sexto de esta resolución, se considerará que constituyen situaciones que generan riesgos de amenazas a la independencia, las siguientes:

a) Circunstancias derivadas de situaciones personales

1. Tener vínculos familiares distintos de los indicados como vínculos familiares estrechos en dichos apartados, con personas que pertenezcan a los órganos de administración o sean altos cargos, desempeñen puestos de trabajo de alta dirección, sean responsables del área económica-financiera o responsables de las funciones de supervisión o control interno de la entidad controlada.
2. Cualesquiera otras circunstancias que sin estar detalladas expresamente puedan generar conflicto de interés y poner en riesgo el principio de independencia. Tal es el caso de situaciones de intimidación o restricciones al normal desarrollo de la auditoría por imposición de restricciones temporales o en el empleo de medios o recursos personales, que no sean razonables o justificables, u orientaciones sesgadas del trabajo, restricciones de alcance que no se deriven de criterios técnicos, etc.
3. Las amenazas descritas en los puntos 1 y 2 de este epígrafe a) se extenderán desde los dos años inmediatamente anteriores contados desde el inicio del control, hasta la fecha en que el auditor público finalice su trabajo.

b) Circunstancias derivadas de servicios prestados

1. La prestación a la entidad controlada de servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o los estados financieros.
2. La prestación a la entidad controlada de servicios de valoración, salvo que no tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca importancia relativa, por separado o de forma agregada, en la información contable o financiera objeto de control y que la estimación del efecto esté documentada de forma exhaustiva en los papeles de trabajo correspondientes al trabajo de control.
3. La prestación de servicios que generen riesgo de autorrevisión o de interés directo o cualesquiera otros riesgos de amenazas a la independencia. En particular, realizar actuaciones de control que afecten a decisiones o trabajos efectuados anteriormente en la entidad objeto de control que no se correspondan con competencias de control asignadas a la Intervención General de la Comunidad de Madrid.





4. Actividades tendentes al mantenimiento de relaciones empresariales o profesionales al margen de la actividad competencial de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
5. La amenaza se extenderá respecto a la prestación de servicios que generan conflicto de intereses relacionadas en los puntos 1 a 4 de este epígrafe b) fuera del objeto de control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, realizadas en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio anterior al controlado hasta la fecha en que el auditor público finalice su trabajo

Decimonoveno. Extensiones subjetivas del auditor público en las amenazas a la independencia

Se extiende el riesgo de amenaza a la independencia en el ejercicio de las funciones de control del auditor, a los siguientes sujetos:

- Cónyuges o quienes mantengan una análoga relación de afectividad.
- Quienes tengan vínculos de consanguinidad hasta cuarto grado.
- Quienes tengan cualquier grado de consanguinidad y vivan durante el periodo mínimo de un año en el hogar.
- Vínculo de afinidad hasta segundo grado.

Estas situaciones de riesgo de amenaza a la independencia también podrán darse en las entidades a que se refiere el apartado siguiente, referidas a extensiones subjetivas de la entidad controlada.

Vigésimo. Extensiones subjetivas de la entidad controlada en relación con las amenazas a la independencia.

1. Se considerará que el auditor público tiene un riesgo de amenaza a la independencia en el ejercicio de sus funciones de control cuando concurren en las entidades vinculadas con la entidad controlada relaciones que generen conflictos de interés derivadas de situaciones personales a las que se refieren los puntos 1 y 2 del epígrafe a) del apartado decimooctavo de esta resolución. En el concepto de vinculación se atenderá a lo indicado en la legislación que se aplique a la entidad controlada de acuerdo con su régimen jurídico.
2. Las amenazas del epígrafe b) del apartado decimooctavo de esta resolución, también generarán amenaza a la independencia cuando se presten a otras entidades con las que la entidad controlada tenga una relación de control, siempre que la prestación de estos servicios se halle fuera del ámbito subjetivo de control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.





3. Las extensiones descritas en los puntos 1 y 2 anteriores serán objeto de análisis específico en función del origen de la amenaza de riesgo de acuerdo con la clasificación establecida en el apartado cuarto de esta resolución y las definiciones de su Anexo I.

Vigésimoprimer. Procedimientos de protección de la independencia y de la incompatibilidad

1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos de protección de la independencia y de la incompatibilidad corresponde al titular de la subdirección general de control financiero, o de la intervención delegada de fondos europeos salvo que la amenaza a la independencia o la incompatibilidad afecten al titular de dicha subdirección general o de dicha intervención delegada en cuyo caso será competente para resolver el procedimiento el titular de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- a) El empleado público realizará una autoevaluación que consistirá en un análisis de su situación respecto al ente objeto de control a efectos de identificar posibles amenazas a la independencia o situaciones de incompatibilidad. Todos los integrantes del equipo de control, quedan obligados a autoevaluarse. Esta autoevaluación se realizará por cada trabajo de control específico que se lleve a cabo, conforme a lo indicado en los Anexos V (Cuestionario de autoevaluación de la protección de la independencia y la incompatibilidad) y Anexo VI (Documento de conclusiones sobre la autoevaluación de la independencia y la incompatibilidad para un trabajo de control concreto).
- b) Dicha autoevaluación será trasladada al superior jerárquico del empleado público quien, en caso de que se hayan detectado posibles amenazas a la independencia o situaciones de incompatibilidad, la remitirá al órgano competente para iniciar el procedimiento según lo señalado en el párrafo anterior.
- c) El superior jerárquico del empleado público, una vez recibida la autoevaluación o llegada a su conocimiento alguna de las circunstancias de incompatibilidad o riesgo de falta de independencia suspenderá cautelarmente, si no perjudica al servicio público, durante el menor tiempo posible sin exceder de tres días hábiles, las labores de control del miembro del equipo con capacidad para influir afectado por la amenaza de riesgo a la independencia o la incompatibilidad y realizará una memoria donde se contenga la evaluación y la propuesta para mitigar los riesgos a la independencia o la incompatibilidad. Al realizar esta suspensión ponderará, el cumplimiento de la obligación legal de realizar el control en relación con los riesgos de incumplimiento del principio de independencia o generación de la incompatibilidad.

Si con el establecimiento de las salvaguardas se mitiga o reduce el riesgo de forma razonable a límites adecuados, no será preciso realizar más procedimientos, salvo la comunicación al titular de la Intervención General de la Comunidad de Madrid. En caso contrario o cuando la situación de riesgo afecte a los titulares de la subdirección general de control financiero, o del titular jefe de la intervención delegada de fondos europeos, se continuará el procedimiento y el órgano competente según lo señalado en el apartado primero resolverá tomando como base esta resolución de protección de la independencia o en su defecto las normas sobre independencia del sector público o aquellas que pudieran ser más idóneas de entre las normas del contexto internacional.





2. La tramitación del procedimiento de evaluación y resolución de la amenaza a la independencia o incompatibilidad se resolverá con la mayor celeridad posible y en el plazo máximo de diez días hábiles, sin perjuicio de que a la luz de las evidencias obtenidas o dispuestas se tomen las medidas cautelares que se consideren proporcionadas para proteger la independencia y el interés público. Dicho plazo quedará interrumpido en caso de que sea necesario que se aporte mayor documentación o que se planteen aclaraciones necesarias para su adecuada evaluación.

3. La comunicación de la resolución adoptada se realizará a través de la subdirección general de intervención y fiscalización, quien la remitirá además a los órganos competentes para la adopción de decisiones, cuando los resultados de la valoración pudieran afectar a la organización de la unidad o al ejercicio de las competencias atribuidas a la intervención delegada.

Los procedimientos de protección de la independencia se concretarán en lo establecido en los Anexos V y VI y estarán relacionados con el tipo de trabajo concreto de control. Estos tendrán validez hasta la fecha de emisión del informe. Dichos procedimientos no agotarán los plazos establecidos si se producen elementos o supuestos modificadores de los hitos de protección de la independencia, que deberán comunicarse de forma inmediata.

En aquellas medidas destinadas a proteger una situación de riesgo de independencia declarada o detectada, el plazo será aquel que resulte necesario para reducir a un nivel razonablemente aceptable el riesgo que en ningún caso deberá exceder el ejercicio económico.

Vigesimalsegundo. Medidas adicionales para la protección de la independencia

1. Sistema de rotación en el puesto de trabajo o en el trabajo del auditor público:

Con el fin de evitar o reducir a límites razonables el riesgo de amenaza a la independencia, previa valoración de las circunstancias concretas, el titular de la subdirección general de control financiero o el de la intervención delegada de fondos europeos a propuesta del auditor público afectado por alguno de los procedimientos descritos en el apartado anterior, procederá a un cambio en al menos un miembro del equipo con capacidad de influir a que se refiere el Anexo I, punto 3 en un plazo no superior a seis años contados desde la fecha de finalización del ejercicio en que se haya efectuado la primera actividad relevante de control.

Este miembro del equipo podrá volver a desempeñar el ejercicio de control, en la entidad controlada de que se trate, en el plazo de 2 años a contar desde la finalización del ejercicio en que se haya producido el cambio o en el momento en que varíen los miembros responsables de los órganos de gestión de la entidad controlada si este es anterior.

La aplicación de la rotación será oportuna en las condiciones indicadas cuando no haya variado ninguno de los miembros responsables de los órganos de gestión de la entidad controlada y ninguno de los miembros del equipo con capacidad de influir. En el supuesto de que se produzca algunas de las variaciones indicadas comenzaría nuevamente el cómputo de plazo de seis años.





2. Empresas de auditoría contratadas

En el caso de que se contraten empresas auditoras de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, deberán incluirse en los documentos contractuales que correspondan (pliegos, contrato, etc.) el siguiente contenido:

- a. Se facilitará a las empresas de auditoría privada en los trabajos en que colaboren en virtud de la citada disposición adicional séptima la información sobre la regulación de la protección de la independencia y la incompatibilidad que figuran en la presente resolución y les exigirá que documenten la protección de la independencia y la incompatibilidad en las mismas condiciones que si se tratara de personal dependiente de la Intervención General de la Comunidad de Madrid
- b. A los efectos de aplicar los criterios de esta resolución a los miembros del equipo de la empresa privada se les considerará personas que son susceptibles de generar influencia, en los términos establecidos en el apartado 3 del Anexo I
- c. Considerando la existencia de salvaguardas regulatorias en el caso de los empleados públicos que no están establecidas en las empresas de auditoría privada, se aplicarán supletoriamente las disposiciones existentes en la regulación de auditoría de cuentas siempre que no vulneren las normas sobre independencia fijadas en la regulación pública. En particular, se emplearán supletoriamente mediante la correspondiente adaptación, los criterios que figuran en los artículos 19, 20, 23 y 24, referidos a incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría, las que se derivan de personas relacionadas con la red del auditor o sociedad de auditoría, las prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría, y las relacionadas con los honorarios de auditoría, de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y el desarrollo reglamentario. Asimismo, se aplicarán los criterios de rotación y limitaciones relativas a las contrataciones sucesivas de auditores para la realización de trabajos sobre una misma entidad establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de aplicación supletoria en la Comunidad de Madrid.
- d. La extensión temporal de las amenazas a la independencia o a la incompatibilidad se contarán desde la fecha del inicio del ejercicio anterior al controlado hasta la fecha del informe de auditoría o documento similar y las prohibiciones se extenderán durante dos años contados desde la fecha de emisión del informe o documento equivalente.
- e. No obstante, lo indicado en los apartados a) a d) anteriores, la valoración de los riesgos de amenazas a la independencia y a la incompatibilidad partirán de la autoevaluación de las empresas privadas de auditoría. Dicha autoevaluación será revisada por la subdirección general de control financiero, o por la intervención delegada de fondos europeos quienes en atención al interés público en la ejecución



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1239404749618460488558**





de los trabajos podrán considerar salvaguardas que mitiguen los efectos de aplicar en el contexto de la auditoría en el sector público, criterios establecidos por la regulación de auditoría privada.

- f. No resultarán de aplicación a las empresas de auditoría contratadas y a su personal, las leyes y los reales decretos de carácter general mencionados en el Anexo II de esta resolución.

Vigesimotercero. Documentación de los procedimientos de protección de la independencia.

Los procedimientos abiertos de protección de la independencia serán archivados junto a los papeles de trabajo de la actuación de control a que se refieran. Si los procedimientos de protección afectan a varios trabajos, se archivarán en una carpeta específica creada al efecto. En el caso de que afecten a un único trabajo se archivarán en los papeles de trabajo correspondientes de acuerdo con los formatos incluidos en los Anexos V y VI. En el supuesto de que se produzca alguna incidencia, comunicación y consulta, se archivarán en los formatos que figuran en los Anexos VII (Comunicación o consulta formulada en relación con algún supuesto de protección de la independencia y la incompatibilidad) y VIII (Memoria de evaluación de la protección de la independencia y la incompatibilidad realizada por el responsable correspondiente).

Vigesimocuarto. Comunicación y formación para la protección de la independencia.

La protección de la independencia se comunicará y se divulgará a toda la organización y se integrará en los planes de formación recurrentes.

Asimismo, cuando existan dudas sobre la comprensión por cualquier persona afectada por el ámbito subjetivo de esta resolución de la regulación de la protección de la independencia e incompatibilidad o sobre una situación específica que se considere que pone en riesgo el principio de independencia o de incompatibilidad, deberá comunicarse al superior jerárquico con carácter inmediato, con el formato establecido en los Anexos VII y VIII de esta resolución.

Vigesimoquinto. Efectividad de la Resolución.

La presente resolución surtirá efectos a partir del día de su firma. En el plazo de un mes desde su firma, el personal incluido en el ámbito de aplicación de la sección segunda deberá realizar la primera autoevaluación a la que se refiere el apartado decimoprimeramente debidamente documentada.

LA INTERVENTORA GENERAL

Firmado digitalmente por: GARCÍA MIRANDA MARTA
Fecha: 2022.04.28 08:45



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1239404749618460488558**





ANEXO I: DEFINICIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE INDEPENDENCIA E INCOMPATIBILIDAD

En este anexo se definen aquellos conceptos más significativos contenidos en la resolución que necesitan de una concreción o desarrollo adicional para facilitar su aplicación. Será de aplicación para todo el personal sometido al ámbito subjetivo de esta resolución.

1. Independencia: se entiende por tal, la ausencia de intereses o influencias que puedan menoscabar la objetividad del empleado público que realiza funciones de control o auditoría para actuar con absoluta libertad en la emisión de su juicio profesional en relación con la actividad y la entidad controladas, lo que implica que se halle libre de toda incompatibilidad; así como de ausencia de riesgo de amenaza a dicha libertad y objetividad que no pueda ser reducido a límites razonables con las correspondientes salvaguardas.

La independencia no consiste sólo en el hecho de que los empleados públicos que realizan funciones de control o auditoría sean independientes, sino en que los demás los consideren como tales.

2. Objetividad: implicará que no se prestará el servicio de control o auditoría si existe algún interés o relación que pueda sesgar o influir indebidamente su juicio profesional.

3. Personas susceptibles de generar influencia: serán susceptibles de generar relación de influencia con la entidad controlada, aquellos empleados públicos que firmen el informe o documento equivalente donde se recojan los resultados del trabajo o responsables del control. En determinadas circunstancias también podrán generar relaciones de influencia los directores de auditoría o control o puestos similares que puedan tener capacidad de influencia en los resultados, determinada por el procedimiento normativo establecido en la supervisión y emisión de informes o documentos similares.

Se entenderá que no será susceptible de generar influencia el superior jerárquico, por su mera condición de tal, cuando no esté prevista procedimentalmente su intervención en una norma o cuando, si lo está, el firmante del informe o documento equivalente pueda excusar dicha rúbrica. En caso contrario el superior jerárquico pasaría a generar influencia de forma directa.

4. Autorrevisión: riesgo de no evaluar apropiadamente el resultado de decisiones o servicios prestados con anterioridad en actividades ajenas a las competencias de control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

5. Interés propio: riesgo generado por la existencia de un conflicto financiero o de otro tipo, incluido el motivado por la existencia de relaciones o intereses económicos comunes que pueda influir en los trabajos de control.

6. Familiaridad o confianza: riesgo generado por la influencia y proximidad excesiva derivada de las características, condiciones y circunstancias de la relación con la entidad controlada y sus órganos de dirección o de gobierno. Se entenderá que dicho riesgo aumenta con la extensión temporal y la proximidad directa de la relación y se resolverá cuando se produzca el cambio de alguna de las partes de dicha relación.





7. Intimidación: riesgo generado por la posibilidad de ser disuadido o condicionado por presiones inapropiadas, en particular causadas por la entidad controlada o sus órganos de dirección o gobierno.

8. Relación laboral: se entenderá por relación laboral aquella que surge por aplicación de la legislación laboral, estatutaria o administrativa.

9. Otra relación: se entenderá por otra relación aquella que pueda tener su origen en asuntos de carácter comercial o financiero o de cualquier otra índole que, siendo distintos de otros identificados, pueda generar riesgo de amenaza de independencia para el empleado público.

10. Fuente directa o indirecta de la amenaza: se entenderá como directa aquella producida entre el empleado público susceptible de ser generador de influencia y la entidad controlada. Se entenderá como amenaza indirecta aquella producida entre el auditor y las extensiones subjetivas de la entidad controlada o entre las extensiones subjetivas del empleado que realiza funciones de control o de auditoría y la entidad controlada o entre las extensiones subjetivas de ambas partes, si bien en este último caso la influencia normalmente será leve o fácilmente cubierta con salvaguardas.

11. Participación directa en las actividades de control: se corresponde con aquella que podría desplegar el empleado público que realiza funciones de control o auditoría que está en posición de generar influencia, bien sea como firmante del informe o documento equivalente donde se recojan los resultados del trabajo o como director en determinadas circunstancias, dependiendo de la estructura del control, la composición de los equipos y su supervisión.

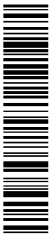
12. Órgano de administración: se entiende por tal, con independencia de su denominación, el que realiza las labores de gestión de acuerdo con las competencias fijadas por las normas correspondientes en función su naturaleza jurídica.

13. Alta dirección o alto cargo: aquellos cargos, cualquiera que sea su vinculación jurídica, laboral o de otra índole, en los que la actividad desplegada en la entidad controlada genere riesgo de autorrevisión en la labor de control, de interés directo o de cualesquiera otros riesgos. Esta consideración dependerá de la estructura o criterios organizativos de la entidad controlada y de la materia y objeto del control.

14. Responsable del área económica financiera: se entiende por responsables del área económica-financiera de la entidad controlada, quienes ocupen un cargo de responsabilidad en relación con la dirección o de supervisión de dicha área o quienes, cualquiera que sea su vinculación jurídica o cargo en la entidad, puedan ejercer una influencia determinante en las políticas contables, presupuestarias o financieras de la entidad controlada.

15. Supervisión o control interno: se entiende por responsable de la supervisión o del control interno a quien tenga atribuidas facultades para orientar y revisar o controlar la política y procedimientos de la entidad controlada.

16. Comunicación inmediata de la incompatibilidad: circunstancia que se habrá de producir en el momento de conocimiento del hecho con independencia de la situación o grado de





madurez en que se encuentre el trabajo o la realización del informe o incluso, una vez emitido este.

17. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta o cuestión litigiosa con gestores o responsables de la entidad o directivos:

Se entenderá que se incurre si el supuesto de hecho surge respecto a los siguientes responsables de la entidad controlada:

- a) Miembros del órgano de administración o puesto similar que se puedan ver afectados por los resultados del trabajo de control.
- b) Altos cargos de la entidad controlada
- c) Responsables del área económica-financiera o de supervisión o control interno.

Dicha amistad íntima o enemistad manifiesta tiene que ser evidenciada con hechos constatables y demostrables en el proceso de evaluación de la protección de la independencia, distintos de los que pudieran derivarse del principio contradictorio empleado en el contraste de los resultados de los trabajos de control.

18. La cuestión litigiosa deberá exceder de los límites de discusión o criterios técnicos derivados de los resultados de los controles y no tener base o soporte directa o indirectamente en dichos criterios.

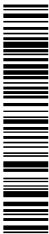
19. Incurso en procesos judiciales penales: en cualquier calidad (querellado, investigado, testigo o perito, etc.) que pudiera generar riesgo de autorrevisión en la toma de decisiones o postura a la considerada al tiempo de haber realizado el control.

20. Importancia relativa o materialidad: se entiende que una cuestión tiene importancia relativa como para generar una amenaza a la independencia en un supuesto que genere autorrevisión o interés personal cuando el importe involucrado sea igual o superior a la materialidad global que cabría establecer de acuerdo con la norma de materialidad aplicable.

21. Salvaguardas: son acciones u otras medidas tendentes a eliminar o reducir las amenazas a la independencia a un nivel aceptable. Las salvaguardas han de ser adecuadas, suficientes y proporcionadas en relación con los factores de riesgos que amenacen la independencia que se quiera mitigar. Si la importancia de estos factores en relación con las medidas de salvaguarda aplicadas es tal que compromete la independencia del empleado público que realiza funciones de control o auditor público, este se abstendrá de realizar los trabajos una vez realizada la evaluación y de acuerdo con el procedimiento establecido.

Las incompatibilidades no podrán mitigarse con salvaguarda alguna.

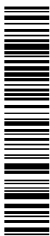
22. Tipos de salvaguardas: las creadas por las leyes y reglamentaciones y las generadas en el entorno del trabajo. Las primeras se refieren a las características fijadas por las normas en relación con la actividad del empleado que realiza funciones de control o auditoría y de la entidad controlada, las segundas se concretan en el establecimiento de un sistema de control de la independencia de carácter general y según los tipos de trabajo.





23. Definiciones específicas en el ámbito del control de fondos europeos

Control de fondos europeos. Extensión subjetiva de la entidad controlada. Las autoridades de los programas, los órganos y organismos y, en su caso, beneficiarios y destinatarios últimos, se definen según lo establecido en los correspondientes reglamentos europeos.





ANEXO II: REGULACIÓN PÚBLICA GENERAL MÁS RELEVANTE RELACIONADA CON LA INDEPENDENCIA Y LA INCOMPATIBILIDAD

Ha de ser de conocimiento general del empleado que realiza funciones de control, puesto que se refiere a la legislación del contexto en que se desarrolla su actividad como empleado público. El conocimiento general de esas normas, junto con la asimilación precisa de la Resolución conllevará disponer de formación en esta materia.

Este Anexo es común para todo tipo de control.

1. Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 (Reglamento financiero), artículo 61.
2. Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, artículos 1.3, 8, 11, 12, 20 en relación con la prevención y corrección de incompatibilidades.
3. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículos 419 a 422 y 441, a la aceptación de regalos y dádivas por funcionario público y a la prestación de determinados servicios a organizaciones privadas en concurrencia con intervenciones por razón de su empleo público, respetivamente.
4. Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y Decreto 45/1997, de 20 de marzo, por el que se desarrolla el Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
5. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, artículo 64.
6. Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, artículos 26 y 27, referidos a los principios de buen gobierno y a las infracciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.
7. Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.
8. Orden 55/1985, de 1 de febrero, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el formulario para la solicitud de compatibilidad de actividades.
9. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los artículos 23 y 24 sobre abstención para intervenir en asuntos donde pueda haber conflicto de intereses y la recusación cuando se detecten posibles situaciones de abstención no conocidas o reveladas, respectivamente.
10. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 53, 54 y 95, referidos a principios éticos, principios de conducta y a la consideración de falta disciplinaria muy grave el incumplimiento de las normas de incompatibilidad, respectivamente.





11. Circular 1/1998, de 26 de enero, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones sobre el ejercicio de la función fiscalizadora.

12. Circular 2/1997, de 27 de junio, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de Control Financiero.

13. Resolución de 1 de septiembre de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se ordena la publicación de la Resolución que aprueba las Normas de Auditoría del Sector Público (aplicación supletoria).

14. Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación de las Normas de Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría.





ANEXO III. CONFIRMACION DE INDEPENDENCIA DEL PERSONAL DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA/ UNIDAD DE CONTROL MATERIAL DE LA INVERSION EN ACTUACIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Este Anexo es aplicable solo al personal al que se refiere la sección segunda de esta resolución.

En calidad de personal asignado al área de función interventora en la intervención delegada...../unidad de control material de la inversión confirmo que he leído y entendido y confirmo el cumplimiento de los requerimientos que me son de aplicación en los siguientes términos:

1. Desde mi adscripción como personal de la intervención delegada..... / unidad de control material de la inversión, no tengo la condición de miembro del órgano de administración de ninguna de las entidades del sector público que constituyen el ámbito subjetivo de control al que estoy adscrito
2. Desde los dos años anteriores al inicio de las actuaciones de función interventora para el que se solicita esta confirmación, no tengo ni he tenido la condición de miembro del órgano de administración ni he desempeñado un puesto de trabajo de alta dirección o de alto cargo en la consejería, organismo o entidad objeto de control. Tampoco he desempeñado funciones de responsable del área económica financiera o de supervisión o control interno en la consejería, organismo o entidad objeto de control. En relación con mis familiares con vínculos estrechos, respecto a las posibles incompatibilidades derivadas de una posible condición ostentada o puesto desempeñado, confirmo en base a mi leal saber y entender que no tengo conocimiento de que ninguno de mis familiares con vínculos estrechos sea administrador o alto cargo, desempeñen puestos de trabajo de alta dirección, sean responsables del área económico-financiera o responsables de las funciones de supervisión o control interno en la consejería, organismo o entidad objeto de control.
3. Desde el inicio del ejercicio de actuaciones de función interventora para el que se solicita esta confirmación (o en el caso de la primera evaluación, “desde la asignación de actuaciones relativas al ejercicio de la función interventora”), no tengo vínculos familiares estrechos con personal perteneciente al órgano controlado, distintos de los señalados anteriormente. Tampoco tengo amistad íntima o enemistad manifiesta con los gestores responsables de los órganos sujetos a control ni ninguna cuestión litigiosa con la consejería, organismos o entidades sujetas a control o con alguno de sus directivos.
4. Desde el inicio del ejercicio de actuaciones de función interventora para el que se solicita esta confirmación (o en el caso de la primera evaluación, “desde la asignación de actuaciones relativas al ejercicio de la función interventora”), no estoy incurso/a en procesos judiciales penales por hechos cometidos en el ejercicio de actuaciones competencia de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.





5. Desde el inicio del ejercicio de actuaciones de función interventora para el que se solicita esta confirmación (o en el caso de la primera evaluación, “desde la asignación de actuaciones relativas al ejercicio de la función interventora”), no he realizado actuaciones de control que afecten a decisiones o trabajos realizados anteriormente en la consejería, organismos o entidades sujetas a control (se exceptúan las actuaciones relativas a las distintas modalidades de control competencia de la Intervención General de la Comunidad de Madrid sobre una misma entidad.).
6. Desde el inicio del ejercicio de actuaciones de función interventora para el que se solicita esta confirmación (o en el caso de la primera evaluación, “desde la asignación de actuaciones relativas al ejercicio de la función interventora”), no formo parte ni asisto a órganos colegiados del órgano sujeto a control (se exceptúa la asistencia a órganos colegiados que cumplen alguno de los siguientes requisitos: actuaciones previstas en la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid y en las demás normas presupuestarias y reguladoras de la gestión económica-financiera del sector público; que no tienen un efecto directo o tienen un efecto de poca importancia relativa, por separado o de forma agregada, en las actuaciones objeto de control; y cualesquiera otras actividades derivadas de las competencias asignadas en las leyes que se realizan en el entorno o como complemento de la función interventora).
7. Desde el inicio de los dos años anteriores al inicio de las actuaciones de función interventora para el que se solicita esta confirmación (o en el caso de la primera evaluación, “desde la asignación de actuaciones relativas al ejercicio de la función interventora”), no he tenido relación laboral con la consejería, organismo o entidad sujetos a control.

Fecha:

Firma:

Nombre:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1239404749618460488558**





Ámbito que cubre esta confirmación:

1. Función interventora

(Se enumerarán las áreas o servicios asignados dentro de la Consejería, Organismo o Entidad).



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1239404749618460488558**

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890142730412809937892**





ANEXO IV. COMUNICACIÓN DE SITUACIONES DE INCOMPATIBILIDAD O DE AMENAZA A LA INDEPENDENCIA DEL PERSONAL DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA / UNIDAD DE CONTROL MATERIAL DE LA INVERSIÓN, EN ACTUACIONES RELATIVAS AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Este Anexo es aplicable solo al personal al que se refiere la sección segunda de esta resolución.

D.....perteneiente al Cuerpo....., con NRP....., en calidad de personal asignado al área de función interventora en la intervención delegada...../unidad de control material de la inversión,

COMUNICO

Que en relación con las actuaciones de función interventora a realizar por esta intervención delegada/unidad de control material de la inversión, considero, una vez realizada la autoevaluación de mi situación respecto de la consejería, organismo/s y entidad/es objeto de control (o en su caso “como consecuencia de circunstancia sobrevenida posterior a la realización de la correspondiente autoevaluación de mi situación respecto de la consejería, organismo/s y entidad/es objeto de control”) que me encuentro incurso en las siguientes situaciones de incompatibilidad y/o de amenaza a la independencia

1. Haber tenido la condición de miembro del órgano de administración o haber desempeñado un puesto de trabajo de alta dirección o de alto cargo, o funciones de responsable del área económica financiera o de supervisión o control interno en la consejería, organismos o entidades objeto de control, en los dos años anteriores al inicio de las actuaciones de función interventora (*Se identificará el órgano de administración al que se hubiera pertenecido, el puesto de trabajo de alta dirección, de alto cargo o de responsable del área económico-financiera, de supervisión o control interno, que se hubiera desempeñado, así como las fechas de inicio y final de desempeño acompañando la correspondiente documentación acreditativa*).
2. Tener vínculos familiares estrechos con personas que pertenezcan a los órganos de administración o sean altos cargos, desempeñen puestos de trabajo de alta dirección, sean responsables del área económico-financiera o responsables de las funciones de supervisión o control interno en la consejería, organismos o entidades objeto de control (*Se identificará el órgano de administración al que pertenece el familiar o el puesto de trabajo de alta dirección, de alto cargo o de responsable del área económico-financiera, de supervisión o control interno desempeñado por el mismo, así como el vínculo del empleado público con el familiar*).
3. Tener vínculos familiares estrechos con personal perteneciente al órgano controlado, distintos de los señalados anteriormente o amistad íntima o enemistad manifiesta con los gestores responsables de los órganos sujetos a control o tener una cuestión litigiosa con la consejería, organismos o entidades sujetas a control o con alguno de sus directivos (*Se especificarán según la circunstancia de que se trate, los puestos de trabajo del personal del órgano controlado y el vínculo familiar, la relación mantenida de amistad o enemistad manifiesta o la cuestión litigiosa. Se describirá, a juicio del propio empleado,*





el modo en que la circunstancia señalada puede comprometer su independencia, identificando en todo caso de forma concreta la relación de las personas afectadas con las actuaciones objeto de función interventora o el interés que pudieran tener en las decisiones que se adopten).

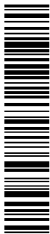
4. Estar incurso en procesos judiciales penales por hechos cometidos en el ejercicio de actuaciones competencia de la Intervención General de la Comunidad de Madrid (*Se identificará el proceso judicial y se describirá la participación en el mismo, aportando la documentación necesaria a estos efectos*).
5. Realizar actuaciones de función interventora que afecten a decisiones o trabajos realizados anteriormente en la consejería, organismos o entidades sujetos a control (*Se identificarán las decisiones o trabajos realizados, las fechas, los destinatarios y se describirán brevemente su contenido y relación con las actuaciones de función interventora*).
6. Formar parte o asistir a órganos colegiados de la consejería, organismos o entidades objeto de control, que no cumplan los requisitos de excepción previstos en el apartado sexto 1. 5º de esta resolución. (*Se identificará el órgano colegiado de que se trate, la participación en el mismo y la normativa de creación y funcionamiento del mismo*).
7. Haber tenido una relación laboral con la consejería, organismos o entidades objeto de control en los dos años anteriores al inicio de las actuaciones de función interventora (*Describir brevemente la relación laboral señalando el órgano en el que se desempeñó el puesto de trabajo, períodos de desempeño y funciones desarrollados, aportando la correspondiente documentación acreditativa*).

Fecha y firma:

Nombre:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1239404749618460488558**



Relación de documentación que se acompaña a esta Comunicación

(Enumerar)



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1239404749618460488558**

La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0890142730412809937892**





ANEXO V: CUESTIONARIO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA INCOMPATIBILIDAD DEL PERSONAL DE CONTROL FINANCIERO, AUDITORIA Y LA INTERVENCION DELEGADA DE FONDOS EUROPEOS

Recoge un cuestionario a nivel general, recordatorio de la autoevaluación, en el que se recorre de forma sistemática las referencias a la legislación aplicable a modo de preguntas. La posible respuesta es “sí”, “no” y “no aplica (N/A)”. La confección del citado cuestionario será la base para responder a los temas planteados en el Anexo VI. En el caso de que se detecte un riesgo de amenaza a la independencia o a la incompatibilidad, se pondrá de manifiesto de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado vigésimo primero de esta resolución referido a “los procedimientos de protección de la independencia y de la incompatibilidad”, detallando el motivo de esta amenaza y conllevará la confección de los Anexos VII y VIII de esta resolución.

Sin perjuicio de lo indicado, cualquier respuesta a este cuestionario del Anexo V, distinta de la opción “no”, deberá justificarse detalladamente y formularse la cuestión o consulta con los formatos y el procedimiento indicados.

| | Situación | no | sí | N/A |
|---|---|----|----|-----|
| 1 | ¿Se encuentra en alguna de las situaciones que prevé la legislación general sobre independencia e incompatibilidad que se halla incluida en el Anexo II? | | | |
| 2 | Sin perjuicio de los puntos concretos que serán revisados en relación con el cumplimiento de la legislación sobre independencia e incompatibilidad, ¿Hay alguna circunstancia o condición que impida poder realizar con garantía razonable el criterio del Anexo I punto 1? | | | |
| 3 | Sin perjuicio de los puntos concretos en relación con la legislación sobre independencia e incompatibilidad, ¿Hay alguna circunstancia o condición que impida realizar su trabajo con la objetividad e imparcialidad a que se refiere el Anexo I punto 2? | | | |
| 4 | ¿Existe conflicto de interés en relación con el Anexo I punto 2 sobre la objetividad o por alguna de las circunstancias derivadas de situaciones personales que se desarrollan en el apartado decimoctavo epígrafe a) de esta resolución? | | | |
| 5 | ¿Existe conflicto de interés, teniendo en cuenta las definiciones del Anexo I puntos 8 y 9, por alguna de las circunstancias derivadas de servicios prestados que desarrolla el apartado decimoctavo epígrafe b) de esta resolución? | | | |
| 6 | ¿Existe riesgo de independencia considerando el Anexo I puntos 4 a 7? | | | |





| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 7 | ¿Existe alguna circunstancia de incompatibilidad recogida en el apartado quinto de esta Resolución de acuerdo con las definiciones que figuran en el Anexo I puntos 11 a 16? | | | |
| 8 | ¿Existe alguna circunstancia que amenace a la independencia del auditor público a que se refiere apartado sexto de esta resolución, y en el Anexo I puntos 10 y 17 a 20? | | | |
| 9 | En el caso de que se hayan detectado riesgos para la Independencia, ¿se han de establecer las salvaguardas desarrolladas en el Anexo I puntos 21 y 22, teniendo en cuenta, en su caso, los ejemplos que se incluyen en el Anexo IX? | | | |
| 10 | Si en el trabajo se han empleado auditores colaboradores a los que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid ¿se han dejado de aplicar los procedimientos previstos en esta resolución teniendo en cuenta lo establecido en el punto 2 del apartado vigésimo segundo? | | | |

D. XXX, empleado público del Cuerpo XXX con NRP XXX que desempeña su puesto de trabajo en XXX, confirmando, de acuerdo con mi leal saber y entender, lo siguiente:

Nota:

Cuando no haya ninguna incidencia, se marcará con una x en la casilla la respuesta que corresponda a “no”. En caso de que se aprecie alguna situación de riesgos, se marcará con una x en la casilla que corresponda a la respuesta “sí” y habrá de ponerse de manifiesto de acuerdo con el procedimiento establecido (Anexos VII y VIII). “N/A” habrá de explicarse en documento aparte.

Fecha y firma





ANEXO VI: DOCUMENTO DE CONCLUSIONES SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA INCOMPATIBILIDAD PARA UN TRABAJO DE CONTROL CONCRETO.

Hace referencia a la evaluación que ha de realizar el auditor público en cada uno de los trabajos que aborde y tendrá carácter recurrente, bien por nueva confección, bien por confirmación de la evaluación existente.

D. XXXXX, empleado público del Cuerpo XXXX con NRP XXX que desempeña su puesto de trabajo en XXX

En relación con el trabajo XXX que se me ha asignado confirmo, de acuerdo con mi leal saber y entender, lo siguiente:

(En caso de no existir problema con la protección de la independencia o la incompatibilidad:)

- 1) Tengo conocimiento actualizado y comprendo la regulación general de la independencia
- 2) Que, una vez realizada la autoevaluación de la independencia e incompatibilidad regulada en la legislación correspondiente, no me hallo en ninguno de los supuestos de amenaza de riesgo de independencia o incompatibilidad
- 3) Que de haber una situación de riesgo en la protección de la incompatibilidad y la independencia lo habría comunicado a mi inmediato superior, de acuerdo con los procedimientos establecidos de acuerdo con el formato del Anexo VII, a los efectos de que se hubieran establecido las correspondientes salvaguardas.
- 4) He realizado la autoevaluación de la protección de la independencia o la incompatibilidad determinada en el Anexo V.

(En caso de haber existido alguna situación de riesgo para la independencia o existencia de incompatibilidad)

Considerando las características de la actividad de control que ha de ser realizada y aplicando los conocimientos indicados, concretados en el Anexo V, aprecio supuestos de riesgos de amenazas a la independencia o de incompatibilidad que he comunicado a mi inmediato superior de acuerdo con la comunicación cuyo formato contiene el Anexo VII y que adjunto a este documento, en el cual se describe el riesgo y, en su caso se propone la correspondiente salvaguarda. Concluido el procedimiento de comunicación se decide que se puede desempeñar el trabajo de control aplicando la salvaguarda establecida, tal y como se indica en la memoria realizada de acuerdo con el Anexo VIII por mi superior jerárquico

(O alternativamente no puedo desempeñar mi trabajo de control y describir la situación)

Por tanto, cumplido con este procedimiento, considero que la protección de mi independencia ha de considerarse adecuada.

Fecha y firma





Nota

Este escrito habrá de firmarse cuando se produzca un nuevo trabajo de control tras consulta, en su caso, al superior jerárquico.

Para la consulta o comunicación habrá de emplearse el formato que consta en el Anexo VII. Si el inmediato superior está de acuerdo con la salvaguarda propuesta, así se lo comunicará al empleado público que realizó la consulta mediante la confección de la memoria a que se refiere el Anexo VIII. No será preciso realizar más procedimientos en caso de acuerdo entre el auditor público y su inmediato superior, salvo la comunicación al titular de la Intervención General de la Comunidad de Madrid el cual podrá reevaluar la evaluación realizada; en caso contrario se continuará con el procedimiento según se determina en el apartado Vigésimo primero. Todos los documentos se archivarán en los papeles de trabajo.





ANEXO VII: COMUNICACIÓN O CONSULTA FORMULADA EN RELACIÓN CON ALGÚN SUPUESTO DE PROTECCIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA INCOMPATIBILIDAD

Cuando del proceso de autoevaluación de la independencia y la incompatibilidad se deduzca alguna situación que deba conocer o resolver el superior jerárquico del auditor público que se autoanaliza, se le comunicará de acuerdo con los criterios establecidos en este Anexo.

Cargo y nombre de inmediato superior

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empleado público del Cuerpo XXXXXX con NRP XXXX que desempeña su puesto de trabajo en XXXXX, una vez realizada la autoevaluación prevista en el Anexo III me encuentro en la siguiente situación en relación con mi puesto de trabajo:

Describir el caso concreto que, según el criterio del empleado público o informante correspondiente, pueda generar la amenaza de riesgo a la independencia o incompatibilidad, detallando la norma concreta que presuntamente se vulneraría y documentando cada extremo sobre el que se basen los argumentos o criterios

Para proteger mi independencia y cumplir con las normas que regulan la materia propongo, en su caso, establecer la siguiente salvaguarda o medida:

Descripción al inmediato superior o a quien corresponda de la salvaguarda que podría establecerse en el caso de que no sea una incompatibilidad, sino un riesgo de amenaza a la independencia. Dicha salvaguarda entiendo que reduce el riesgo de amenaza a la independencia a un nivel razonable.

Fecha y firma

Nota:

Para la consulta o comunicación habrá de emplearse el formato que consta en este Anexo. Cualquier comunicación o consulta deberá estar lo suficientemente detallada y documentada como poder apreciar todos los extremos sobre los que se basan las dudas sobre el asunto, así como determinar de forma concreta y precisa qué legislación la soporta.

Si el superior jerárquico está de acuerdo con la salvaguarda propuesta, así se lo comunicará al empleado público que realizó la consulta. Se archivará la documentación en los papeles de trabajo y no será preciso realizar más procedimientos, salvo la comunicación al titular de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, el cual podrá reevaluar la evaluación realizada. Para contestar el inmediato superior hará la memoria que se establece en el Anexo VI.





ANEXO VIII: MEMORIA DE EVALUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA INDEPENDENCIA Y LA INCOMPATIBILIDAD

Hace referencia a la evaluación por parte del superior jerárquico o quien corresponda de acuerdo con el procedimiento de comunicación o conocimiento de la protección de la independencia o la incompatibilidad establecido en el punto vigésimo primero de esta Resolución referido a los procedimientos de protección de la independencia y la incompatibilidad.

Se trata, por tanto, de una memoria en la que se detalla la información existente sobre el riesgo de amenaza a la independencia o la incompatibilidad, el origen de la amenaza (recibido o comunicado), el análisis del riesgo y la salvaguarda que, en su caso, pueda ser aplicada, así como la conclusión sobre el riesgo como tal y su reducción a un nivel razonable con la correspondiente salvaguarda, o estimar el riesgo y decisión de apartar del trabajo al auditor público que tenga comprometida su independencia o se halle en un supuesto de incompatibilidad. Este apartamiento puede ser temporal como medida cautelar o definitivo. En cualquier caso, implica un procedimiento contradictorio entre las partes implicadas, cuyo resultado ha de incluirse en la propia memoria de evaluación.

I.-Conocimiento y comunicación del riesgo

Con fecha xxxxx (me ha sido comunicada- por el propio auditor público o por la entidad controlada- o ha sido detectada por esta unidad que) el empleado público XXX asignado al puesto de trabajo XXX y al control xxxx, se halla incurso en un riesgo de amenaza de independencia o posible incompatibilidad. Se adjunta a este documento la documentación que ha servido de base para tomar la decisión o que pudiera tener efecto en la protección de la independencia del citado empleado público.

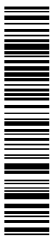
II.- Análisis del riesgo y, en su caso, proposición de salvaguardas

En síntesis, el riesgo expuesto y documentado consiste en xxxx y está tipificado en el apartado XXX de la xxxx y la salvaguarda que se propone se centra en xxx.

III Conclusión

Se desestima

Se considera que del análisis efectuado no se infiere el expresado riesgo para la independencia o la incompatibilidad expuesto por el empleado público (o deducido inicialmente por esta unidad) o por la entidad controlada y, por consiguiente, el empleado público solicitante o afectado puede desarrollar con normalidad sus funciones en relación con el citado control, sin perjuicio de mantener informada a esta unidad si se produce alguna variación que pueda suponer un incremento del riesgo.





Se estima y se establecen medidas de salvaguarda

Se considera que, del análisis efectuado, se infiere el expresado riesgo para la independencia o la incompatibilidad expuesto por el empleado público (o deducido inicialmente por esta unidad o formulado por los representantes de la entidad controlada), que ha de mitigarse mediante la siguiente salvaguarda (describir de forma precisa la salvaguarda propuesta) hasta reducirlo a un nivel de significación aceptable. Con las medidas indicadas puede desarrollar con normalidad sus funciones en relación con el citado control, sin perjuicio de mantener informada a esta unidad si se produce alguna variación que pueda suponer un incremento de riesgo.

Se estima y se suspende la participación del empleado público en el control correspondiente

Se considera que del análisis efectuado, se infiere el expresado riesgo para la independencia o la incompatibilidad expuesto por el empleado público (o deducido inicialmente por esta unidad o formulado por los representantes de la entidad controlada), por lo que dicho profesional ha de abstenerse de intervenir en el citado control, hasta que se resuelva la situación generadora del riesgo o la incompatibilidad analizada, sin perjuicio de mantener informada a esta unidad si se produce alguna variación que pueda suponer un incremento de riesgo

Nombre y cargo

Fecha y firma





ANEXO IX: EJEMPLOS DE AMENAZAS Y SALVAGUARDAS

Contiene, sin ánimo de exhaustividad, ejemplos de amenazas y salvaguardas estándares que pueden ser utilizados tanto para alcanzar una mayor asimilación de la materia como para constituir propuestas en un caso concreto

A.- EJEMPLOS DE AMENAZAS

I. Amenazas de interés propio

1. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, tiene un interés financiero directo en la entidad controlada.
2. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, mantiene una relación empresarial, comercial o financiera significativa con la entidad controlada. Basta con que esta relación sea significativa para una de las partes.
3. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, entabla negociaciones con vistas a incorporarse a la plantilla de la entidad controlada.
4. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, descubre un error significativo en un trabajo previo realizado.

II. Amenazas de autorevisión

1. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, diseña e implementa un sistema de control interno que se impone sin alternativas a la entidad controlada, el cual es un elemento significativo en el objeto del control.
2. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, realiza la contabilidad o prepara la información financiera.
3. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, es o ha sido recientemente miembro del consejo de administración o de un órgano de similares funciones o directivo de un departamento o sección de la entidad controlada, relacionado directamente con el objeto del control.
4. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, trabaja o ha trabajado recientemente para la entidad controlada en un puesto que le permite ejercer una influencia significativa sobre la materia objeto de análisis del encargo.
5. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, presta un servicio a la entidad controlada que afecta directamente a la información sobre la materia objeto de análisis en el control.

III. Amenazas de familiaridad

1. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, es familiar con vínculo estrecho de consanguinidad o afinidad o similar relación con algún miembro de la entidad controlada que ocupa un puesto de trabajo con capacidad de influir de





forma significativa (empleado, encargado, etc.) en la materia objeto del control. Se entiende que a algunos puestos se les atribuye esta capacidad de influir por el mero hecho de estar en ese puesto, como, por ejemplo: administradores, responsables del control interno y responsables del área económica-financiera.

2. Algún miembro de la entidad controlada que ocupa un puesto de trabajo con capacidad de influir de forma significativa (administrador, directivo, etc.) en la materia objeto del control ha sido recientemente auditor público con capacidad de influir en el control de la entidad controlada.
3. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, acepta regalos, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía y sean de valor insignificante o de efecto intrascendente.
4. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, se mantiene en el equipo de control durante un largo periodo de tiempo¹ en la misma entidad controlada sin que se produzca variación en los participantes por ambas partes.

IV. Amenazas de intimidación

1. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, ha sido amenazado con un cambio en la regulación que afecta a la competencia del control.
2. Se ha recibido una indicación de la entidad controlada de que se solicitará la inhabilitación o la recusación de un auditor público participante en el control con capacidad de influir por desacuerdo con el tratamiento técnico de alguna materia objeto del control
3. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, ha sido amenazado por la entidad controlada, o por algunos de sus responsables, con ser demandado.
4. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, ha sido presionado para reducir de manera inadecuada la extensión de trabajo o el alcance del trabajo con el fin de reducir costes.
5. Un auditor público participante en el control con capacidad de influir, ha sido informado por la organización a la que pertenece de que no será promocionado tal como estaba previsto, salvo que acepte un tratamiento técnico inadecuado o discutible por parte de la entidad controlada.

¹ Superior a seis años





B.- EJEMPLOS DE SALVAGUARDAS

I. Salvaguardas establecidas en la normativa.

Son aquellas que de acuerdo con la legislación vigente protegen la objetividad del auditor público o la objetividad de las operaciones de la entidad controlada de forma más explícita y detallada que en otros sectores. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de normas, sin que con ello se pretenda relatar todas estas disposiciones, sino simplemente presentar un conjunto de ejemplos de los que inferir unos principios o modos de actuación determinados.

1. Normas que objetivan la selección del personal dependiente de la Administración Pública dentro de la cual se halla la organización competente para realizar el control.
2. Normas que objetivan y tasan la promoción, remoción, formación y ascenso de los empleados públicos
3. Normas que fijan principios de defensa de los intereses generales y códigos éticos en el desempeño de la función pública.
4. Normas específicas de defensa de la independencia e incompatibilidad de los empleados públicos encargados del control y las finanzas.
5. Normas de carácter financiero general en las que se fijan el coste de los servicios y sueldos públicos.
6. Norma de carácter financiero concreto que establece la obligación legal de auditarse como una competencia que no exige flujos de honorarios ni ningún otro emolumento entre entidades controladas y el auditor público.
7. Normas de carácter presupuestario en las que se determinan los criterios de fijación y manejo de los instrumentos presupuestarios y de endeudamiento.
8. Normas de carácter contractual donde se objetivan y desarrollan las relaciones de las Administraciones Públicas en relación con los contratos celebrados con terceros
9. Normas en que se fijan los ingresos tributarios de acuerdo con sus diferentes naturalezas y competencias.
10. Normas por las que se fijan y determinan los sistemas de subvención y ayudas públicas.
11. Normas de índole administrativa en las que se describen competencias y funciones y sus formas tasadas de cambiarlas.

II. Salvaguardas establecidas en el entorno del trabajo de control

En el entorno de trabajo, las salvaguardas aplicables variarán según las circunstancias y las estructuras de las organizaciones. Las salvaguardas en el entorno de trabajo comprenden las salvaguardas a nivel de la organización auditora y a nivel de cada control concreto. Considerando el gran contingente regulador existente en las Administraciones Públicas, muchas salvaguardas deducidas o establecidas en el entorno del trabajo se encuentran





recogidas en normas de derecho positivo, con lo cual se produce una cierta relación entre unas y otras, que no tiene otra trascendencia que una mayor dificultad clasificatoria, incluso didáctica.

1. Por parte de la organización auditora se resalta la importancia del cumplimiento de los principios fundamentales de la independencia y la necesidad de su conocimiento por todos los miembros de la organización que intervengan en los controles.
2. Se establezcan políticas y procedimientos para implementar y extender los protocolos de independencia los cuales puedan ser operativos y comprobables en la supervisión y coordinación.
3. Existencia de políticas documentadas y orientadas a la necesidad de identificar las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, de evaluar la importancia de dichas amenazas y de aplicar salvaguardas para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable o, cuando no se disponga de salvaguardas adecuadas o éstas no se puedan aplicar la abstención o recusación correspondiente.
4. Políticas y procedimientos internos documentados y sistemáticos que constaten el cumplimiento de las normas sobre independencia.
5. Políticas y procedimientos que permitan la identificación de intereses o de relaciones entre los miembros de la organización auditora, o los miembros de los equipos de control y las entidades controladas.
6. Utilización de normas e incluso equipos distintos para la realización de aquellos controles que tenga una relevancia especial.
7. Políticas y procedimientos con el fin de prohibir a aquellos que no son miembros del equipo del encargo que influyan de manera inadecuada en el resultado del control.
8. Comunicación en tiempo oportuno de las políticas y procedimientos de la organización auditora, incluido cualquier cambio de los mismos, a todos los equipos de trabajo, y formación teórica y práctica adecuada sobre dichas políticas y procedimientos.
9. Nombramiento de un miembro de la alta dirección como responsable de la supervisión del correcto funcionamiento del sistema de protección de la independencia.
10. Información a todo el equipo de trabajo sobre las posibles extensiones subjetivas de las entidades controladas a los efectos de valorar la independencia, a través de la disposición de las diferentes bases de datos disponibles.
11. Existencia de un mecanismo disciplinario en las leyes correspondientes, incluido el Código Penal, para fomentar el cumplimiento de la independencia y la incompatibilidad.
12. Publicación de políticas y procedimientos para alentar y capacitar al personal para que comunique a los niveles superiores dentro de la organización auditora de cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento de los principios fundamentales que les pueda preocupar.





13. Recurrir a una segunda opinión de un profesional de similar o superior categoría de quien emitió la primera opinión.
14. Recurrir al asesoramiento independiente concreto de algún asunto de la auditoría que se considere realizado por alguien con riesgo de falta de independencia.
15. Revelar a quien corresponda o esté afectado por los resultados de esta situación de riesgo de falta de independencia para valorar su opinión, siempre que no coarte la independencia de la entidad auditora.
16. Recurrir a técnicos de otra Administración Pública que tengan parecidas condiciones de competencia y experiencia.
17. Rotación del personal más antiguo del equipo de trabajo para tratar de tener en consideración otra visión del asunto.

Las salvaguardas pueden ser propuestas por el personal afectado, por otro miembro de la organización o del equipo y por el superior jerárquico, pero siempre habrá de ser decidida su aplicación por este último de acuerdo con lo establecido en el apartado Séptimo de esta Resolución.



ANEXO B

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL



ANEXO B

ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

1 Confidencialidad

El adjudicatario se comprometerá a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por el Organismo Pagador de la Comunidad de Madrid (Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior) necesarios para la ejecución de los trabajos de auditoría para el cierre del programa de desarrollo rural 2014-2020 de la Comunidad de Madrid.

En particular, será considerado como Información Confidencial todos los resultados de la ejecución de los servicios contratados (los Servicios), debiendo el adjudicatario mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del contrato.

2 Protección de datos

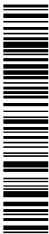
2.1. Normativa

De conformidad con la Disposición adicional 25ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que impliquen el tratamiento de datos de carácter personal deberán respetar en su integridad el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (RGPD), y la normativa complementaria.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este deberán de constar por escrito.

2.2. Tratamiento de Datos Personales

La Intervención General, en su calidad de Organismo de Certificación, de conformidad con artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 908/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento de la UE 1306/2013 en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia, debe emitir un Informe y un dictamen del cierre del programa de desarrollo rural 2014-2020, presentado por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación como organismo pagador de los fondos europeos agrícolas de la Comunidad de Madrid.



Para realizar los trabajos de auditoría necesarios, la Intervención General ha considerado necesario efectuar la licitación del contrato de servicios objeto de este Pliego.

Así, para el cumplimiento del objeto de este pliego, el adjudicatario del citado contrato deberá tratar datos personales de los cuales la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación es Responsable del Tratamiento de la manera que se especifica en el Anexo a este pliego, denominado "Tratamiento de Datos Personales".

Ello conlleva que el adjudicatario actúe en calidad de Encargado del tratamiento y, por tanto, tiene el deber de cumplir con la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los Datos Personales.

Por tanto, recaen sobre el adjudicatario las responsabilidades de Encargado de Tratamiento. Si el adjudicatario destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del Tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El Anexo "Tratamiento de Datos Personales" describe en detalle los Datos Personales a proteger, así como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por el adjudicatario.

En caso de que como consecuencia de la ejecución del contrato resultara necesario en algún momento la modificación de lo estipulado en el Anexo "Tratamiento de Datos Personales", el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la Intervención General y la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, estuviesen de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo "Tratamiento de Datos Personales" actualizado, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

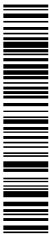
2.3 Estipulaciones como Encargado de Tratamiento

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, el adjudicatario se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, complementadas con lo detallado en el Anexo "Tratamiento de Datos Personales":

a) Tratar los Datos Personales conforme a las instrucciones establecidas en el presente Pliego o demás documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato y aquellas que, en su caso, señale la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de la Intervención General de la Comunidad de Madrid por escrito en cada momento.

El adjudicatario informará inmediatamente a la Intervención General de la Comunidad de Madrid cuando, en su opinión, una instrucción sea contraria a la normativa de protección de Datos Personales aplicable en cada momento. La Intervención General dará traslado inmediato de la citada información a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, como Responsable del tratamiento.

b) No utilizar ni aplicar los Datos Personales con una finalidad distinta a la ejecución del objeto del Contrato.



c) Tratar los Datos Personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los Datos Personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y seguridad detalladas en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”.

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los Datos Personales a los que tenga acceso para la ejecución del contrato, así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase del tratamiento por cuenta del adjudicatario, siendo deber del adjudicatario instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún después de la terminación de la prestación del Servicio o de su desvinculación.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los Datos Personales objeto de este pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a disposición tanto de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, como de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, dicha documentación acreditativa.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de Datos Personales de las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa del Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los Datos Personales a terceros, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar Delegado de Protección de Datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y comunicarlo a la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, también cuando la designación sea voluntaria, así como la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por el adjudicatario como sus representante(s) a efectos de protección de los Datos Personales (representantes del Encargado de Tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento de Datos Personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i) Una vez finalizada la prestación contractual objeto del presente Pliego, se compromete, según corresponda y se instruya en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o destruir los Datos Personales a los que haya tenido acceso; los Datos Personales generados por el adjudicatario por causa del tratamiento; y los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. El Encargado del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación contractual con la Intervención General. En este último caso, los Datos Personales se conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.



j) Según corresponda y se indique en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar bajo el control del organismo pagador de la Comunidad de Madrid o bajo el control directo o indirecto del adjudicatario, u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por la Intervención General, previa conformidad del responsable del tratamiento, según se establezca en dicho Anexo en su caso, y únicamente por los usuarios o perfiles de usuarios asignados a la ejecución del objeto de este Pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así expresamente por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación o por la Intervención General de la Comunidad de Madrid, a tratar los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas autorizados conforme a lo establecido en este Pliego o demás documentos contractuales, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea el adjudicatario se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia internacional de datos, informará por escrito de esa exigencia legal a la Intervención General de la Comunidad de Madrid que, informará a su vez a la Dirección General Responsable del tratamiento. La comunicación anterior se efectuará con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables a la Intervención General o a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.

l) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, de forma inmediata y a más tardar en el plazo de 72 horas, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los Datos Personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Comunicará con diligencia información detallada al respecto, incluso concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante el Encargado del Tratamiento, éste debe comunicarlo a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho.



Asistirá a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

n) Colaborar con la con la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información de la que disponga.

Asimismo, pondrá a disposición de la Dirección General Responsable del tratamiento y de la Intervención General, a requerimiento de estas, toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pliego y demás documentos contractuales y colaborará en la realización de auditorías e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la Intervención General de la Comunidad de Madrid o por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

En los casos en que la normativa así lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento efectuadas en ejecución del contrato que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

o) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de protección de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a título de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de la Intervención General de la Comunidad de Madrid a requerimiento de estas. Asimismo, durante la vigencia del contrato, pondrá a disposición de ambas toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada momento.

p) Derecho de información: El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo correspondiente de este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento entre la Intervención General de la Comunidad de Madrid como órgano contratante y el adjudicatario a que hace referencia el artículo 28.3 RGPD, siendo el responsable del tratamiento la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, organismo pagador de los fondos europeos agrícolas. Las obligaciones y prestaciones que aquí se contienen no son retribuíbles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación de Servicio objeto de este pliego y su contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato, el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este pliego no se requiere que el adjudicatario acceda a ningún otro Dato Personal ajeno al objeto del contrato y por tanto no está autorizado en caso



alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del contrato que conllevará un acceso accidental o incidental a Datos Personales no contemplados en el Anexo “Tratamiento de Datos Personales” el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en concreto de su Delegado de Protección de Datos, con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas.

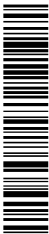
2.4. Sub-encargos de tratamiento asociados a Subcontrataciones

Cuando el pliego permita la subcontratación de actividades objeto del pliego, y en caso de que el adjudicatario pretenda subcontratar con terceros la ejecución del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a Datos Personales, el adjudicatario lo pondrá en conocimiento previo de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que la Intervención General decida, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación previo acuerdo con la Dirección General Responsable del tratamiento.

En todo caso, para autorizar la contratación, es requisito imprescindible que se cumplan las indicadas a continuación. No obstante, aun cumpliéndose las mismas, la decisión de si otorgar, o no, dicho consentimiento corresponde a la Intervención General de la Comunidad de Madrid siempre con la conformidad de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

- Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación.*
- Que el adjudicatario y la empresa subcontratista formalicen un contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual será puesto a disposición de la Intervención General de la Comunidad de Madrid que lo remitirá inmediatamente a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación a su mera solicitud para verificar su existencia y contenido.*

El adjudicatario informará a la Intervención General de la Comunidad de Madrid de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otros subcontratistas, dando así a la Intervención General la oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta de la Intervención General a dicha solicitud por el contratista equivale a oponerse a dichos cambios.



ANEXO

“TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”

Descripción general del tratamiento de Datos Personales a efectuar

Descripción

El tratamiento consistirá en todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para la realización de los trabajos de auditoría, elaboración de los papeles de trabajo y redacción del informe necesarios para el cierre del programa de desarrollo rural 2014-2020 de la Comunidad de Madrid.

Todos los trabajos deberán desarrollarse con sujeción a las directrices de la Comisión Europea y, en particular, a la directriz nº 2 sobre la auditoría de certificación anual de gastos del FEAGA/FEADER en la que se abordan los requisitos para los organismos de certificación en virtud del artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.

El personal adscrito por la organización adjudicataria, para proporcionar los Servicios establecidos en el Pliego puede tratar Datos Personales. Los Datos Personales se tratarán únicamente por el personal adscrito y al único fin de efectuar el alcance contratado.

Las solicitudes de acceso a las aplicaciones del organismo pagador por parte del personal del adjudicatario serán efectuadas ante la Intervención General, que las remitirá a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación como Responsable del tratamiento.

En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesario, en algún momento, la modificación de lo estipulado en este Anexo, el adjudicatario lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso de que la Intervención General estuviese de acuerdo con lo solicitado, emitiría un Anexo actualizado previa consulta a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Colectivos y datos tratados

Los colectivos de interesados y Datos Personales tratados a los que puede tener acceso el adjudicatario son:



| Tratamientos y principales colectivos de interesados | Datos personales del tratamiento a los que se puede acceder |
|---|---|
| <p>Tratamiento 1: FEADER NO SIGC</p> <p>Pruebas de auditoría sobre las solicitudes de ayuda y pagos efectuados por el organismo pagador de la Comunidad de Madrid en el marco del fondo FEADER.</p> <p>El colectivo interesado son los solicitantes de ayudas con cargo al FEADER no incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC).</p> | <p>Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, cuenta bancaria, dirección postal, dirección electrónica, teléfono y firma. Edad. Posesiones, licencias, permisos y autorizaciones. Datos bancarios.</p> <p>Bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones/indemnizaciones.</p> |
| <p>Tratamiento 2: Solicitud única</p> <p>Pruebas de auditoría sobre las solicitudes de ayuda y pagos efectuados por el organismo pagador de la Comunidad de Madrid en el marco del fondo FEADER.</p> <p>El colectivo interesado son los solicitantes de ayudas con cargo al FEADER SIGC.</p> | <p>Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, cuenta bancaria, dirección postal, dirección electrónica, teléfono y firma. Edad. Posesiones, licencias, permisos y autorizaciones. Datos bancarios.</p> <p>Bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones/indemnizaciones</p> |
| <p>Tratamiento 3: Ayudas LEADER</p> <p>Pruebas de auditoría sobre las solicitudes de ayuda y pagos efectuados por el organismo pagador de la Comunidad de Madrid en el marco del fondo FEADER.</p> <p>El colectivo interesado son los solicitantes de ayudas con cargo al FEADER tramitadas a través de Grupos de Acción Local.</p> | <p>Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, cuenta bancaria, dirección postal, dirección electrónica, teléfono y firma. Edad. Posesiones, licencias, permisos y autorizaciones. Datos bancarios.</p> <p>Bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones/indemnizaciones</p> |
| <p>Tratamiento 4: Incumplimientos ayudas</p> <p>Pruebas de auditoría sobre las irregularidades, deudas, anticipos y garantías gestionadas por el organismo pagador en el marco del fondo FEADER.</p> <p>Colectivo interesado: solicitantes de ayudas del FEADER.</p> | <p>Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, cuenta bancaria, dirección postal, dirección electrónica, teléfono y firma. Edad. Posesiones, licencias, permisos y autorizaciones. Datos bancarios.</p> <p>Bienes y servicios suministrados por el afectado, bienes y servicios recibidos por el afectado, transacciones financieras, compensaciones/indemnizaciones.</p> |



Elementos de tratamiento

El tratamiento de los Datos Personales comprenderá: *(márquese lo que proceda)*

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Recogida (captura de datos) | <input type="checkbox"/> Registro (grabación) | <input type="checkbox"/> Estructuración | <input type="checkbox"/> Modificación |
| <input checked="" type="checkbox"/> Conservación (almacenamiento) | <input type="checkbox"/> Extracción (retrieval) | <input checked="" type="checkbox"/> Consulta | <input type="checkbox"/> Cesión |
| <input type="checkbox"/> Difusión | <input checked="" type="checkbox"/> Interconexión (cruce) | <input checked="" type="checkbox"/> Cotejo | <input type="checkbox"/> Limitación |
| <input type="checkbox"/> Supresión | <input type="checkbox"/> Destrucción (de copias temporales) | <input checked="" type="checkbox"/> Conservación (en sus sistemas de información) | <input type="checkbox"/> Otros: _____ |
| <input type="checkbox"/> Duplicado | <input type="checkbox"/> Copia (copias temporales) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Recuperación |

Disposición de los datos al terminar el Servicio

Una vez finalice el encargo, el adjudicatario debe:

- a) Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

No obstante, el Responsable del Tratamiento, a través de la Intervención General, podrá requerir al encargado para que en vez de la opción a), cumpla con la opción b) o con la c) siguientes:

- b) Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos utilizados por el encargado. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.
- c) Destruir los datos, una vez cumplida la prestación. Una vez destruidos, el encargado debe ratificar su destrucción por escrito y debe entregar el certificado al responsable del tratamiento y a la Intervención General. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.



En todos los casos anteriores se consideran incluidas entre las responsabilidades de la ejecución de la prestación, además de las contraídas con la Intervención General, aquellas otras derivadas del cumplimiento de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) (en particular NIA-ES 230), conforme a las cuales deben ejecutarse los trabajos o de otra normativa que establezca el deber de conservación y custodia por parte del auditor.

Medidas de Seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad. De acuerdo con la evaluación de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad siguientes:

- la seudonimización y el cifrado de datos personales;
- la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, así como la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
- un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.
- un catálogo de medidas de seguridad reconocido en normativas o estándares de seguridad de la información.

El adjudicatario no podrá no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un análisis de riesgo o evaluación de impacto salvo aprobación expresa de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación como Responsable del tratamiento.

A estos efectos, el personal del adjudicatario debe seguir las medidas de seguridad establecidas por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación y por la Intervención General, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por ésta.

